Proyecto de Ley N° 539/2021-CR

CONGRESO de la REPÚBLICA

HILDA MARLENY PORTERO LÓPEZ

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite y Digitalización de Documentos
25 OCT 2021
RECIBIDO
Hora 6:21 pm

LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 26497, LEY ORGÁNICA DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL, Y LA LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, CON LA FINALIDAD DE CONSIGNAR LA SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

El grupo parlamentario Acción Popular, a iniciativa de la Congresista de la República que suscribe, **HILDA MARLENY PORTERO LÓPEZ**, en ejercicio de las facultades de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, y de conformidad con los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, propone el siguiente Proyecto de Ley:

FÓRMULA LEGAL

El Congreso de la República
Ha dado la siguiente Ley

LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 26497, LEY ORGÁNICA DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL, Y LA LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, CON LA FINALIDAD DE CONSIGNAR LA SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

Artículo 1.- Objeto de la ley

El objeto de la presente ley es modificar el inciso l) del artículo 32° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el artículo 76° de la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, estableciendo la obligatoriedad de la declaración de la condición de discapacidad con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás.

Artículo 2.- Modificación del inciso l) del artículo 32° de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Modifícase el inciso l) del artículo 32° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el cual queda redactado de la siguiente manera:

> *"Artículo 32.- El Documento Nacional de Identidad (DNI) debe contener, como mínimo, la fotografía del titular de frente y con la cabeza descubierta, la impresión de la huella dactilar del índice de la mano derecha del titular o de la mano izquierda a falta de este, además de los siguientes datos:*

R.U: 710807

(...)

l) La declaración del titular de la condición de discapacidad permanente, según tipo y porcentaje.
(...)"

Artículo 3.- Modificación del artículo 76° de la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad

Modifícase el artículo 76° de la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, el cual queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 76.- Certificado de la discapacidad
(...)

76.5 La condición de persona con discapacidad también se acredita con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y su sola presentación ante entidades públicas y privadas garantiza los beneficios que la ley y los tratados de los cuales el Perú es parte, reconocen.

76.6 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) incorpora la condición de discapacidad permanente, según tipo y porcentaje, en el Documento Nacional (DNI), previa presentación del certificado de discapacidad.
(...)".

Firmado digitalmente por: PAREDES FONSECA Karol Nelli FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/10/2021 15:25:03-05

Lima, octubre de 2021

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VERGARA MENDOZA Elvis Hernan FAU 20161749126 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/10/2021 14:41:07-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PORTERO LOPEZ Hilda Marleny FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/10/2021 14:34:01-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VERGARA MENDOZA Elvis Hernan FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/10/2021 14:40:53-05

HILDA MARLENY PORTERO LÓPEZ
Congresista de la República

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORI CELIS Juan Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/10/2021 14:51:34-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ZEBALLOS MADARIAGA Carlos Javier FAU 20161749126 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/10/2021 14:56:09-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MARTINEZ TALAVERA Pedro Edwin FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/10/2021 15:16:27-05

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 29 de OCTUBRE del **2021**

Según la consulta realizada, de conformidad con el Artículo 77° del Reglamento del Congreso de la República: pase la Proposición **N° 539** para su estudio y dictamen, a la (s) Comisión (es) de:

1. **INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

HUGO ROVIRA ZAGAL
Oficial Mayor
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta busca fortalecer el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad[1] (en adelante, la(s) PCD), mediante la incorporación de su condición en el Documento Nacional de Identidad (en adelante, DNI), teniendo en cuenta que, las PCD constituyen una de las poblaciones más vulnerables en nuestro país, las mismas que vienen siendo afectadas por las discriminaciones, segregaciones y falta de acceso a oportunidades, ocasionadas por tener limitaciones físicas y sociales, contribuyendo en su propia exclusión.

No olvidemos que, las PCD son aquellas que presentan una o más deficiencias (físicas, sensoriales, intelectuales, o mentales) de carácter permanente y que, al interactuar con las barreras del entorno o actitudinales, ven limitado o impedido el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en virtud de lo establecido en el artículo 2° de la Ley N.° 29997, Ley General de la Persona con Discapacidad[2].

II. MARCO CONCEPTUAL

Hasta el siglo XIX la discapacidad era vista como una maldición, un castigo divino. Las PCD eran erróneamente llamadas "minusválidas", "inválidas" o "impedidas", y eran rechazadas por la sociedad[3]. Desde 1940 hasta 1990 se pasó a un modelo médico y/o de rehabilitación, en el cual la PCD era definida como enferma, necesitada de atención médica especializada por considerar que tiene un "problema". Eran vistas desde un punto de vista paternalista y asistencialista, lo cual invisibilizaba sus derechos, requiriendo en todo momento la intervención de un tercero que actúe en su nombre.

A partir del siglo XXI, el concepto de la discapacidad ha venido experimentando cambios, entendiéndose ahora como una cuestión de derechos humanos. Así, la discapacidad es abordada desde la dignidad intrínseca de todo ser humano, y la valoración y el respeto de las diferencias. El problema ya no se sitúa en las PCD, sino en la sociedad que no considera ni tiene presente sus necesidades[4].

Actualmente, se reconoce la diversidad en la condición de las PCD, su derecho a tener calidad de vida y se advierte la necesidad de eliminar barreras sociales y físicas que entorpecen su participación en la sociedad que se centra en la dignidad y respeto a las

1 Son personas que presentan deficiencias en sus funciones corporales (fisiológicas o psicológicas de los sistemas corporales) y/ o en las estructuras corporales (partes anatómicas del cuerpo, órganos, extremidades y sus componentes).

2 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. MIMP - Lima, diciembre de 2012. https://www.gob.pe/institucion/conadis/informes-publicaciones/223512-ley-general-de-la-persona-condiscapacidad-y-su-reglamento.

3 El modelo de la Constitución de 1993, en sus orígenes, tal como ocurría con la de 1979 (artículo 19), parte de una concepción que comprendía a la discapacidad únicamente como una enfermedad, pues se consideraba a la persona "incapacitada", con "deficiencia física o mental" que "no puede velar por sí misma" y que tiene que estar "a cargo" de entidades bajo el "régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad". Incluso, en el debate constitucional, los asambleístas de la Constituyente de 1979 usaron términos como "minusválidos", "impedidos físicos, sensoriales o mentales", entre otros. Exposición de motivos del Decreto Legislativo 1384, que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de setiembre de 2018.

4 Cfr. PALACIOS, Agustina y BARIFFI Francisco. "La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Una aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". Madrid: Cinca, 2007.

personas y no en sus deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Bajo este paradigma entendemos que una persona puede tener una deficiencia, pero la sociedad, con impedimentos sociales, culturales y físicos, crea una discapacidad en sí al dificultar su inclusión y participación plena y efectiva en igualdad de condiciones.

No obstante, el reconocimiento de sus derechos, en la práctica las personas que viven con alguna discapacidad han visto restringido el ejercicio de sus derechos, siendo históricamente objeto de discriminación por los prejuicios que los rodean, lo que ha determinado que las PCD no cuenten con las mismas oportunidades que la población en general, enfrentándose a barreras de mayor intensidad para el desarrollo de su vida. Entre otros aspectos, las PCD encuentran dificultad para recibir educación y una atención de salud adecuada, para conseguir empleos, participar en la política, económica y social del país, y desenvolverse en el ámbito personal, e incluso para el ejercicio de sus derechos políticos. Estas dificultades varían en atención a distintos factores, como, por ejemplo, el sexo y la situación económica.

Hay que dejar en claro que la discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad es parte de la condición humana de forma que casi todas las personas experimentarán en algún momento de su vida una discapacidad temporal o permanente. El funcionamiento es también variable en el curso de la vida, al nacimiento presentamos un absoluto grado de dependencia de nuestros padres, progresivamente se adquieren habilidades que nos permite tener un funcionamiento que permite una independencia total, aunque "funcionemos" diferente uno de otros; al llegar a la adultez mayor experimentaremos una mayor dificultad en el desarrollo de las actividades cotidianas, dependencia que a medida que pasan los años se hace mayor.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al enfoque Bio-Psico-Social de la discapacidad plasmado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)[5], define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Se entiende entonces por discapacidad a la condición en la cual en la interacción entre las personas que padecen alguna deficiencia/enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado) se produce una restricción en la participación, así como en el ejercicio pleno de los derechos de dicha persona. Por lo que al hablar de discapacidad no la entendemos como un atributo exclusivo de la persona, sino de un conjunto complicado de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto/entorno.

El Informe Mundial sobre la Discapacidad, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial (2011)[6], ha destacado los siguientes obstáculos:

5 Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: versión para la infancia y adolescencia: CIF-IA. https://apps.who.int/iris/handle/10665/81610.

6 Este documento proporciona información sobre la discapacidad con el objetivo de facilitar datos a las Administraciones Públicas en orden a la formulación de políticas y programas inclusivos para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, facilitando la aplicación de la Convención de la ONU. Incluye recomendaciones para la adopción de medidas que mejoren la vida de estas personas.

políticas y normas insuficientes; actitudes negativas (creencias y prejuicios); prestación insuficiente de servicios; problemas con la prestación de servicios; financiación insuficiente; falta de accesibilidad en términos generales para lugares públicos, sistemas de transporte, información; falta de consulta y participación en las decisiones que los afectan de manera directa; y la falta de datos y pruebas.

En el mundo el 15% de su población vive con alguna forma de discapacidad, constituyendo la minoría más grande del mundo[7]. En el Perú, se afirma que el 5.2% (un millón y medio) de la población tiene alguna discapacidad[8], aunque de aplicarse a nuestro país el porcentaje señalado por la Organización Mundial de la Salud, las cifras serían mucho mayores. Las circunstancias en que vive la mayoría de este colectivo, es de ser víctimas de múltiples y agravadas formas de discriminación, en el acceso a la educación, a los servicios de salud, en el trabajo, transporte, entre otros. Asimismo, las PCD deben hacer frente a diversas barreras físicas, sociales y culturales que les impiden gozar plenamente de las libertades y derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, la libertad de tránsito, el derecho al trabajo, la capacidad jurídica y la accesibilidad universal; los que suceden por el desconocimiento y el incumplimiento de los derechos reconocidos a su favor.

La población que en los censos 2017 declaró tener alguna discapacidad, es decir, "alguna dificultad o limitación permanente que le impide desarrollarse normalmente en sus actividades diarias", alcanza la cifra de 3 millones 209 mil 261 personas, que representan el 10,3% de la población del país. Entre las mujeres, 1 millón 820 mil 304 personas que representan el 11,5% señalaron estar en esta condición, y en el caso de los hombres, son 1 millón 388 mil 957, que en términos porcentuales son el 9,0% de ellos.

Tabla N° 1: Población con y sin discapacidad, según sexo y área de residencia (2017)

PERÚ: POBLACIÓN CON Y SIN DISCAPACIDAD, SEGÚN SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2017
(Absoluto y porcentaje)

Sexo y Área de residencia	Población total	Población con discapacidad		Población sin discapacidad	
		Absoluto	%	Absoluto	%
Total	**31 237 385**	**3 209 261**	**10,3**	**28 028 124**	**89,7**
Hombre	15 467 946	1 388 957	9,0	14 078 989	91,0
Mujer	15 769 439	1 820 304	11,5	13 949 135	88,5
Área Urbana	**25 579 027**	**2 715 892**	**10,6**	**22 863 135**	**89,4**
Hombre	12 581 299	1 145 448	9,1	11 435 851	90,9
Mujer	12 997 728	1 570 444	12,1	11 427 284	87,9
Área Rural	**5 658 358**	**493 369**	**8,7**	**5 164 989**	**91,3**
Hombre	2 886 646	243 509	8,4	2 643 137	91,6
Mujer	2 771 712	249 860	9,0	2 521 852	91,0

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

"Informe Mundial sobre la Discapacidad". Organización Mundial de la Salud- Banco Mundial, 2011. https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/.

7 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. "Informe mundial sobre la discapacidad". 2011. Recuperado en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/7030/Informe_Mundial_sobre_la_Discapacidad_.pdf

8 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. "Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS), 2012. Recuperado en https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1171/ENEDIS%202012%20-%20COMPLETO.pdf

A nivel de área de residencia, el 10,6% de la población del área urbana, es decir, 2 millones 715 mil 892 personas manifestaron tener alguna discapacidad en los términos antes señalados. En el área rural, el porcentaje de población en esta condición alcanza el 8,7% que corresponde a 493 mil 369 personas. En ambas áreas, es la población femenina la que en mayor proporción declaró tener alguna dificultad o limitación permanente para realizar sus actividades diarias.

Los censos de población, permiten medir la migración reciente, mediante la inclusión en la boleta censal, de una pregunta respecto al lugar de residencia de la población cinco años antes de la fecha censal, denominada migración reciente. Los resultados muestran que entre la población que declaró tener alguna discapacidad, hay un total de 121 mil 628 personas que han cambiado de residencia en los últimos cinco años. El departamento que resulta más atractivo para los inmigrantes continúa siendo Lima con 44 mil 421 personas que llegaron allí, luego se ubica la Provincia Constitucional del Callao (8,264), Arequipa (7,603) y Junín (5,546), entre los principales. Estos mismos departamentos son los que también atraen a la población sin discapacidad.

El Perú no es ajeno a ésta realidad y, conforme se aprecia de los informes de la Defensoría del Pueblo, de organizaciones de y para PCD, como Sociedad y Discapacidad (SODIS), Confederación Nacional de Discapacitados del Perú (CONFENADIP), Sociedad Peruana de Síndrome Down (SPSD), se vienen registrando vulneraciones a los derechos de las PCD, tales como la discriminación por razón de discapacidad, la denegación de ajustes razonables, el reconocimiento a su capacidad jurídica, la accesibilidad, acceso a la justicia, entre otros, por ello, es necesario conocer en forma sucinta, los aspectos más importantes de las normas vigentes a nivel internacional y nacional que regulan sus derechos, especialmente la CDPD y su Protocolo Facultativo, la Ley General de la Persona con Discapacidad, así como, jurisprudencia sobre el tema.

Es menester, señalar que la lucha por la vigencia plena de los derechos humanos no es un derrotero lineal ni continuo, sino que es un camino zigzagueante y lleno de avances, errores y enmiendas. En este sentido, si bien desde 1945, en primer lugar, con la Carta de las Naciones Unidas y luego, en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos se plasmó el ideal de la dignidad humana a nivel universal, es preciso señalar que ello no fue realidad inmediata para varios grupos en situación de vulnerabilidad. En efecto, muchos países continuaron (y en algunos casos continúan) legitimando la discriminación racial, la exclusión política de las mujeres, la prohibición del uso de lenguas indígenas o la denegación de derechos laborales a los migrantes en situación irregular. Frente a cada una de estas violaciones, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos estableció instituciones y generó instrumentos internacionales de diversa índole con el fin de defender los derechos de estos grupos excluidos. No obstante, un grupo en situación de vulnerabilidad y estigmatizado desde los albores de la Humanidad: las PCD continuaban siendo invisibilizado.

Por lo demás, el concepto de discapacidad no es estático, ha mutado en el tiempo y sigue en permanente evolución, debido a que, no se puede generalizar a la

"discapacidad" como si existiera solo una, sino de "discapacidades" al existir diferentes tipos de deficiencias y barreras. También es un error considerar que todas las PCD tienen el mismo grado de afectación y que requieren el mismo tipo de atención.

Ahora bien, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad[9] (en adelante, la CDPD) y la Ley N.° 29973, Ley general de la Persona con Discapacidad, fomentan toda forma de eliminación de barreras de acceso a los servicios, promueven la protección para la igualdad de todos sus derechos fundamentales, así como el buen trato para alcanzar su inclusión social plena y efectiva; por ello: "Las personas con discapacidad mental, intelectual, sensorial o física pueden efectuar el trámite de manera personal y directa, a través de quien ejerza su cuidado o, de ser el caso, a través de apoyo designado judicial o notarialmente".

En efecto, las PCD deben contar con facilidades en todo momento del proceso de atención. En ese sentido, el DNI para PCD física, sensorial, mental o intelectual, a partir de los 17 años, es gratuito.

Sin embargo, las personas con discapacidad intelectual o mental mayores de edad que no cuentan con apoyos nombrados o designados, y cuyo nacimiento no hubiera sido inscrito, podrán ser representadas por la persona que ejerce su cuidado de hecho, suscribiendo las respectivas solicitudes de inscripción extemporánea de nacimiento. El mismo cuidador de hecho podrá solicitar la inscripción en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) para la obtención del DNI (cfr. Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA 2017). Directiva N° DI-415-GRC/032 "Procedimientos Registrales para la Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas Autorizadas", vigente desde del 03 de agosto de 2017. Oficio Circular N° 000007-2015/GAJ/RENIEC. Directiva N° 415-GRC/032 y Decreto Legislativo N.°1384).

Debe señalarse que, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (en adelante, RENIEC) es un organismo constitucionalmente autónomo, encargado de manera exclusiva y excluyente de las funciones de organizar y actualizar el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales, así como, entre otros, de emitir los documentos que acreditan su identidad.

Ahora bien, el RENIEC dispuso la emisión gratuita del DNI de todos los procedimientos registrales previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, relacionados con la emisión del DNI, que invoquen las PCD, en virtud de la Resolución Jefatural N° 599-2004-JEF/RENIEC, publicada en el Diario Oficial *El Peruano*, el 02 de octubre de 2004.

Así las cosas, tal disposición tuvo como objeto el reconocimiento de los derechos sustentados en el principio de igualdad de oportunidades previsto por el artículo 4° de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, así como en las Normas

9 "Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad" – Organización de las Naciones Unidas – Nueva York. Diciembre, 2006 https://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?navid=21&pid=582.

Uniformes sobre, la Igualdad de Oportunidades para las PCD, aprobadas por la Asamblea General de la Naciones Unidas en su Resolución N.° 48-96.

En efecto, para el ejercicio de los derechos fundamentales y derechos específicos, resulta indispensable que las personas con discapacidad recaben su respectivo Documento Nacional de Identidad, siendo necesario establecer medidas de acción positiva que garanticen el ejercicio de su derecho a la identidad, considerando la situación de indefensión de este grupo prioritario.

Por Resolución Jefatural N° 114-2006-JEF/RENIEC, publicada en el Diario Oficial *El Peruano*, el 3 de marzo de 2006, se aprobó el nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos del RENIEC, estableciendo los requisitos, condiciones y derechos que corresponde satisfacer a los usuarios para los diversos servicios que brinda la entidad.

En tal virtud, es necesario precisar que respecto al TUPA aprobado rige lo dispuesto por la acotada Resolución Jefatural N° 599-2004-JEF/RENIEC, respecto a los alcances del beneficio de gratuidad para las personas con discapacidad, a los procedimientos de Inscripción, Canje de Libreta Electoral por DNI, Renovación por Caducidad del DNI, Duplicado, Rectificación de datos, entre otros, relacionados con la emisión del DNI, tanto para niños, niñas y adolescentes con discapacidad como para adultos con discapacidad.

Dentro de este marco, conforme el inciso c) del artículo 98° del Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 015-98-PCM, es atribución de la Jefatura Nacional, determinar la gratuidad de los servicios que brinda el RENIEC.

Para tal fin, las PCD acreditarán su condición a través del certificado de discapacidad[10], copia certificada de la Resolución de Inscripción en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (en adelante, CONADIS), constancia emitida por el Colegio de Educación Especial o Constancia Médica de Discapacidad.

Cabe considerar, por otra parte, que el Carné de Discapacidad en Perú, que se conoce como el "Carné de CONADIS" es un documento que se entrega por medio de una resolución del CONADIS a la persona con discapacidad que lo solicita, previo envío de documentos necesarios. Asimismo, el Carné en sí mismo te sirve para poder acceder a diversos programas, servicios y beneficios que la Ley dispone para las personas con discapacidad en el Perú.

Existen algunos tipos de Carné de Discapacidad que se determinan según el grado: leve, moderado o severo, de la discapacidad. El contar con el Carné de Discapacidad es sumamente importante porque te permite acceder a los distintos beneficios para las personas con discapacidad.

10 Es el primero paso para obtener el Carnet de Discapacidad que emite CONADIS.

Además, es el documento oficial que acredita la discapacidad, sirve para mantener un registro actualizado y poder a partir de él establecer programas, servicios y actividades en favor de las personas con discapacidad.

De acuerdo con la nueva Norma Técnica de Salud para la evaluación, calificación y certificación de la PCD, NTS N.° 127-MINSA/2016/DGIESP, aprobada por Resolución Ministerial N° 981-2016/MINSA del 21 de diciembre de 2016, publicada por el Ministerio de Salud, indica que se ha logrado agilizar los procesos de evaluación, calificación y certificación para el otorgamiento de los Certificados de Discapacidad, ampliando los lugares en los que se otorga la certificación.

Este certificado puede ser solicitado en los puestos de salud, centros médicos y hospitales de:

- MINSA;
- Gobiernos Regionales y Locales;
- Sanidad de las Fuerzas Armadas;
- Sanidad de la Policía Nacional del Perú;
- EsSalud;
- Instituto Nacional Penitenciario (INPE); y,
- Establecimientos de salud de las clínicas privadas que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-REINPRESS-SUSALUD.

Esta nueva norma establece que luego de la evaluación, la entrega del Certificado de Discapacidad será inmediata cuando se trate de discapacidad evidente o congénita. Para un mejor entendimiento, será inmediata únicamente para las personas que, a pesar del tratamiento, la capacidad funcional no cambie.

En consecuencia, el Certificado de Discapacidad es el documento válido que permite acreditar la condición de la persona con discapacidad y su uso es requisito para el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad y obtención del Carné de Discapacidad.

Entonces, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Jefatural N° 599-2004-JEF/RENIEC, precisada por la Resolución Jefatural N° 183-2006-JEF/RENIEC, se ha establecido el beneficio de gratuidad para las PCD que tramiten algunos de los procedimientos orientados a la emisión del DNI contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado por Resolución Jefatural N° 114-2006-JEF/RENIEC.

Para acogerse al beneficio indicado las personas deberán presentar, junto con los requisitos del TUPA, el Certificado de Discapacidad o una copia certificada de la Resolución de Inscripción en el CONADIS o constancia emitida por un Centro de Educación Especial o Constancia Médica de Discapacidad.

Los trámites que incluyen el beneficio de gratuidad para PCD son las siguientes:

- Inscripción Mayor de Edad - Para jóvenes de 18 y 19 Años.
- Inscripción Mayor de Edad - Para los ciudadanos de 20 años a más.
- Inscripción Menor de Edad.
- Duplicado de DNI.
- Renovación por caducidad del DNI.
- Canje de la libreta electoral por el DNI.
- Inscripciones - Por Naturalización.
- Inscripciones - Por Matrimonio de Menor de Edad u Obtención de Título Oficial.
- Inscripciones - De personas con discapacidad mental o intelectual, motora, auditiva, de lenguaje o visual.
- Reinscripciones.
- Rectificaciones de datos con Emisión de DNI - De Prenombres, Apellidos y Otros datos contenidos en el Acta de Nacimiento.
- Rectificaciones de datos con Emisión de DNI - De Estado Civil.
- Rectificaciones de datos con Emisión de DNI - De la decisión de ceder Órganos.
- Rectificaciones de datos con Emisión de DNI - De domicilio
- Inscripción Obligatoria - Para Jóvenes de 17 Años y hasta antes de cumplir 18 años de Edad.
- Inscripciones - de Personas con Resolución Judicial de Interdicción.
- Rectificaciones de Datos con Emisión de DNI - Con Resolución Judicial de Interdicción.

La Defensoría del Pueblo señaló que en los últimos años se vienen instalando más hogares protegidos en el país, los cuales están a cargo del sector Salud y acogen a las personas con discapacidad mental que no cuentan con apoyos o un lugar donde vivir y donde los cuidadores los acompañan en su desarrollo personal.

III. MARCO NORMATIVO

La defensa de la PCD y el respeto de su dignidad deberían ser también el fin supremo de la sociedad y del Estado. Este es uno de esos escenarios problemáticos que no solo refleja el drama humano que padecen aquellas PCD, que no significa incapacidad y no es una enfermedad, sino la enorme responsabilidad o irresponsabilidad de quienes se encargan de su cuidado y protección, ya sean los padres, familiares, terceros e incluso el Estado.

De forma concordante con el Derecho Constitucional peruano y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 2°.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas consagran las obligaciones generales de los Estados partes, precisando que tienen la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición social.

Del mismo modo, el artículo 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 2°.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas consagran la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno, mediante la cual los Estados partes tienen el deber de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades, si el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos no estuviere garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter.

De forma especial, la CDPD y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad[11] (en adelante, CIEFDPD), establecen los compromisos de los Estados partes de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las PCD.

La comunidad internacional ha advertido estrecha relación existente entre situaciones sociales de exclusión y la carencia de documento de identidad, que acentúa la condición de vulnerabilidad de determinados grupos humanos, entre ellos, las PCD. Es así que la CDPD y su protocolo facultativo[12], ratificado por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa N.° 29127 del 1 de noviembre del 2007, constituyen un avance fundamental en materia del derecho a la identidad. En su artículo 12°, inciso 1, se establece el derecho que las personas con discapacidad tienen al reconocimiento de su personalidad jurídica en todas partes. Aún más específico y significativo resulta el caso de su artículo 18°, inciso 1b, que prohíbe expresamente la privación de la capacidad para obtener, poseer y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otro documento de identificación, a personas con discapacidad en razón de esa condición.

Por su parte, el literal a) del numeral 1 del artículo 4° de la CDPD y su Protocolo Facultativo, cuenta con una previsión dirigida a los Estados, quienes se comprometen a:

> "[A]doptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención."

Los Derechos de las PCD, es considerado como uno de los instrumentos de derechos humanos técnicamente más avanzados de cuantos se han desarrollado hasta la fecha[13]. Su objetivo es "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones

11 Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 1999. Para el Perú: Aprobada mediante Resolución Legislativa N° 27484, de fecha 15 de junio de 2001. Ratificada por Decreto Supremo N° 052-2001-RE. Instrumento de ratificación, depositado el 30 de agosto de 2001. Fecha de ratificación, 2 de julio de 2001. Fecha de entrada en vigencia el 29 de septiembre de 2001.

12 El Estado peruano ha ratificado ambos instrumentos mediante el Decreto Supremo 073-2007-RE, publicado el 31 de diciembre del 2007, obligándose a garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la CDPD a través de sus diversos sectores y niveles de gobierno. Su vigencia a nivel nacional e internacional se produjo el 3 de mayo de 2008.

13 Cfr. BRIEL PORTERO, Isabel. "Los derechos de las personas con discapacidad". Valencia: Tirant Lo Blanch, 2011. p.113.

de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las PCD, y promover el respeto de su dignidad inherente"[14].

En la misma línea se pronuncia la CIEFDPD, reafirmando el compromiso de los países miembros de adoptar las medidas de carácter legislativos, social y educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminarla discriminación contra las PCD y propiciar su plena integración en la sociedad, entre las cuales se cuentan las dirigidas a corregir distorsiones y obstáculos a su acceso y participación en actividades políticas y de administración.

Por otro lado, aunque no tiene carácter jurídico vinculante, la Declaración de Durban adoptada por la "Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia" (realizada en setiembre de 2001 en Sudáfrica), insta a los Estados a que adopten todas las medidas posibles para garantizar que todas las personas, sin discriminación, estén inscritas en el registro y tengan acceso a la documentación necesaria que refleje su identidad jurídica y les permita beneficiarse de los procedimientos y recursos legales disponibles, y las oportunidades de desarrollo, así como para reducir la trata de personas.
Las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en el marco del contenido propositivo de la presente propuesta legislativa, se enlaza de forma inextricable con el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica consagrado en los artículos 3° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 16° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 12° de la CDPD. Esta última disposición internacional establece el igual reconocimiento como persona ante la ley y a la capacidad jurídica (refiriéndose también a la capacidad de obra en la toma de decisiones) y personalidad jurídica de las PCD en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

En consecuencia, corresponde al Estado peruano asumir una política integral que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos y, en el caso específico que nos compete, el derecho a la identidad y al reconocimiento de la personalidad jurídica de los individuos, actuando en observancia de los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales aplicables, y estableciendo las condiciones para que todos los peruanos y peruanas ejerzan este derecho en un plano de igualdad.

El contenido *iusfundamental* del derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica reconoce a la persona, en cualquier parte, como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales, lo cual implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad y goce) y deberes. La violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de los derechos y deberes civiles y fundamentales[15].

14 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Artículo 1.
15 Corte IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de setiembre de 2009. Serie C N.° 2002, párr. 87; *Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de setiembre de 2005. Serie C N.° 130, párr. 176; *Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C N.° 172, párr. 166, y *Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N.° 146, párr. 188.

Pues bien, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica no ha sido reconocido expresamente en la Constitución peruana; sin embargo, puede encontrar asidero en el derecho fundamental a la identidad consagrado en el inciso 1 del artículo 2° de la Norma fundamental del Estado, que reconoce que todos tienen derecho —entre otros— a su identidad y a su libre desarrollo y bienestar.

Respecto a este derecho, el Tribunal Constitucional del Perú (en adelante, TC) ha desplegado un desarrollo jurisprudencial bajo diversas sentencias de gran relevancia para el análisis del tema, entre las que destaca, la recaída en el Expediente N° 06040-2005-PA/TC (caso Karen Mañuca Quiroz Cabanillas), de fecha 20 de abril de 2006, en la cual adopta una posición sobre la identidad como aquella compuesta por elementos objetivos (aspectos estáticos) y subjetivos (aspectos dinámicos), donde estos últimos se derivan del propio desarrollo y comportamiento personal. En esta sentencia se hace un primer acercamiento a la definición de identidad personal sin llegar a precisar o detallar si el sexo es un elemento subjetivo o dinámico.

El TC peruano considera que de entre los atributos esenciales de la persona, ocupa un lugar primordial el derecho a la identidad consagrado en el numeral 1 del artículo 2° de la Constitución, entendido como "el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo como es". Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.)[16].

De esta forma, cuando una persona invoca su identidad, en principio lo hace para que se la distinga frente a otras, pero aun "cuando a menudo tal distinción pueda percibirse con suma facilidad a partir de datos tan elementales como el nombre o las características físicas (por citar dos ejemplos), existen determinados supuestos en que tal distinción ha de requerir de referentes muchos más complejos, como puede ser el caso de las costumbres, o las creencias (por citar otros dos casos). El entendimiento de tal derecho, por consiguiente, no puede concebirse de una forma inmediatista, sino necesariamente de manera integral"[17].

En esa misma línea de razonamiento, el TC ha señalado que "en nuestro ordenamiento jurídico el DNI permite que el derecho a la identidad se haga efectivo, en tanto posibilita la identificación precisa de su titular; pero también constituye un requisito para el ejercicio de los derechos civiles y políticos consagrados por la Constitución"[18].

De esta manera, vemos como el desarrollo de la jurisprudencia del TC ha conducido al reconocimiento de un nuevo derecho, como consecuencia de una interpretación

16 Cfr. STC N.° 05829-2009-AA/TC, de fecha 12 de octubre de 2010, fundamento 2.
17 Cfr. STC N.° 02273-2005-PHC/TC, de fecha 20 de abril de 2006, fundamento 23.
18 Cfr. STC N.° 00139-2013-PA/TC, de fecha 18 de marzo de 2014, fundamento 2.

evolutiva de la Constitución y en amparo del artículo 3° de la misma. Esto con la finalidad de proteger los derechos constitucionales y que también constituyen derechos humanos como ha sido reconocido por la Corte Interamericana. Sobre todo, de aquellos grupos minoritarios que no se encontraban en la mirada del debate del constituyente de 1993, y que por ello la labor interpretativa del máximo intérprete ocupa una función de vital importancia para la protección de los derechos, en atención a que la Constitución es una "norma de máximos".

En tal sentido, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica reconocido en el Derecho Internacional, es el derecho a la identidad en el ordenamiento jurídico peruano y, en aplicación de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política y el artículo VIII del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, deben ser interpretados conjunta y complementariamente, pues el contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derecho Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos construidos según tratados de los que el Perú es parte.

La Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, tiene el objeto de la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la PCD, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica.

En otras palabras, la norma descrita reconoce por primera vez en el ordenamiento peruano la capacidad jurídica de todas las PCD en todos los aspectos de su vida, con especial incidencia en el manejo de los asuntos económicos, el derecho a contraer matrimonio y, a decidir sobre el ejercicio de su sexualidad y su fertilidad. En el mismo sentido, la Ley N° 29973 reconoce también por primera vez en una norma interna el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (artículo 11°), así como el derecho a la participación en la vida política y pública de las PCD (artículo 12°). Precisamente estos son los principales ámbitos en los que las PCD mental e intelectual han encontrado barreras para desarrollarse.

Con la aparición del Estado moderno, en donde éste debe asumir una serie de roles orientados a regular las relaciones entre los individuos y, entre éstos y el Estado, surge la idea de identificar a cada ciudadano mediante un documento, en principio, para poder ordenar la administración y los servicios que brinda ésta en beneficio de los ciudadanos.

Así, el RENIEC es un organismo constitucionalmente autónomo encargado de organizar y actualizar el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil.

La Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil crea el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales como un registro de

seguridad jurídica público, estableciendo que como consecuencia de la inscripción en el mismo se expida el DNI, documento público, personal e intransferible, que constituye la única cédula de identidad personal de los nacionales para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judicial y, en general, para todos aquellos casos en que por mandato legal, deba ser presentado, constituyendo adicionalmente, el único título de derecho al sufragio de la persona a cuyo favor ha sido otorgado.

El artículo 26° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, establece lo siguiente:

> "El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un documento público, personal e intransferible. Constituye la única cédula de Identidad Personal para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales, y en general, para todos aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser presentado. Constituye también el único título de derecho al sufragio de la persona a cuyo tenor ha sido otorgado."

Conforme lo dispuesto por la mencionada disposición y el artículo 88° del Reglamento de las Inscripciones del RENIEC, aprobado por Decreto Supremo N° 015-98-PCM, las personas que accedan a los servicios y bienes esenciales regulados en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM[19], deben emplear su DNI, dada su condición de única cédula de identidad personal.

De la norma glosada fluye que el DNI, dentro de nuestro sistema jurídico, cumple la misión de identificar de manera individual a los ciudadanos nacionales, además de posibilitar la realización de diversos actos jurídicos que inciden en su esfera privada.

Complementariamente el artículo 30° de la citada Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil dispone expresamente que para efectos identificatorios ninguna persona, autoridad o funcionario podrá exigir, bajo modalidad alguna, la presentación de documento distinto al DNI.

Cabe mencionar que el inciso l) del artículo 32° de la Ley N° 26497, fue incorporado por el artículo 2° de la Ley N.° 29478, publicada el 18 diciembre 2009, el cual estableció "La declaración voluntaria del titular de sufrir discapacidad permanente", una propuesta que surgió a propósito del Informe Defensorial N.° 37°[20], aprobado por la Defensoría del Pueblo del Perú mediante Resolución Defensorial N.° 16-2000-DP del 21 de marzo de 2000, donde se propone al Jefe del RENIEC que se incluya en el DNI, a solicitud del interesado, la información sobre la discapacidad que el ciudadano o ciudadana presenten, a fin de identificarlos y brindarles la atención que corresponda al momento del ejercicio de sus derecho civiles, políticos, económicos y culturales y organizar los archivos y los registros de inscripción a fin de identificar a las PCD e indicar tal condición en el padrón electoral, por ejemplo, al momento de su actualización.

19 Mediante Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se dispuso que, durante el Estado de Emergencia, se garantiza la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales regulados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo.

20 Mediante Resolución Defensorial N.° 16-2000-DP del 21 de marzo de 2000, se hicieron públicas las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo sobre la base del Informe Defensorial N.° 37 "El Derecho de Sufragio de las personas con discapacidad", de marzo de 2000.

Al respecto, con los estudios desarrollados por la Defensoría del Pueblo en marzo de 2000, se aperturó un camino interesante para las iniciativas legislativas que propusieron establecer facilidades para la emisión del voto de las PCD y precisar los datos que debe contener el Padrón Electoral. En ese sentido, fueron promulgadas las siguientes disposiciones legales, entre ellas: (i) Ley N° 29478, Ley que modifica los artículos 65°, 203° y 263° de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, publicada el 18 de diciembre de 2009; y, (ii) Ley N° 30411, Ley que modifica los artículos 197° y 203° de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, publicada el 12 de enero de 2016, respectivamente.

Como se aprecia, dicha iniciativa fue en el mismo sentido que las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, puesto que la realidad exige establecer facilidades para la emisión del voto de las PCD, así como permitir que, en el DNI se consigne información sobre alguna discapacidad, a fin de otorgar las facilidades del caso al momento de la emisión del voto.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 37° de la citada Ley, el DNI, tiene una vigencia de ocho (08) años, en tanto no concurran las circunstancias que tal disposición precisa, a cuyo vencimiento debe ser renovado de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 26497 y el artículo 95° del Reglamento de las Inscripciones del RENIEC, el cual señala que el DNI que no sea renovado perderá su vigencia.

En este orden de razonamiento, la situación expuesta podría limitar no solo la identificación de las personas, sino el acceso a los servicios y bienes esenciales regulados en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, principalmente aquellos relacionados al Derecho a la Salud y el Derecho al Trabajo previstos en los literales c, d y f del citado decreto supremo, resultando necesario por consiguiente establecer lineamientos para privilegiar los derechos fundamentales de las personas, entre ellas, las PCD.

Con lo que el Estado peruano ha marcado la pauta que para que las personas que quieran hacer uso de su ejercicio de personalidad, para el derecho deben contar con este documento[21]. Al respecto, el TC, en relación con el DNI, en la sentencia recaída en el Expediente N° 2273-2005-PHC/TC, Caso Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, determinó que dicho documento posibilita la identificación personal; constituye un requisito para el ejercicio de derechos civiles y políticos, así como para el desarrollo de actividades comerciales y de carácter personal. Más aún, el Tribunal dejó abierta la posibilidad de que la negativa a expedirlo sea causa suficiente de vulneración de otros derechos fundamentales:

> "(...) 25. En efecto, en nuestro ordenamiento, el Documento Nacional de Identidad tiene una doble función: de un lado, permite que el derecho a la identidad se haga efectivo, en tanto posibilita la identificación precisa de su titular; y, de otro, constituye un requisito para el ejercicio de los derechos civiles y políticos consagrados por la Constitución vigente. Además,

21 El DNI debería consignar el nombre (sin los apellidos) del padre y la madre, lo que reduciría en parte los problemas de homonimia actualmente existentes.

> dicho documento es requerido para el desarrollo de actividades comerciales, trámites judiciales y otros trámites de carácter personal, de modo que su carencia comporta una limitación de otros derechos ciudadanos, uno de los cuales está referido a la libertad individual.
> 26. Como es fácil percibir, de la existencia y disposición del Documento Nacional de Identidad depende la eficacia del derecho a la identidad y de la multiplicidad de derechos fundamentales. De ahí que cuando se pone en entredicho la obtención, modificación o supresión de tal documento, no sólo puede verse perjudicada la identidad de la persona, sino también un amplio espectro de derechos, siendo evidente que la eventual vulneración o amenaza de vulneración podría acarrear un daño de mayor envergadura, como podría ocurrir en el caso de una persona que no pueda cobrar su pensión de subsistencia, por la cancelación intempestiva del registro de identificación y del documento de identificación que lo avala (...)."

Asimismo, el TC advierte que la denegatoria injustificada en la expedición del DNI incide de manera negativa en el derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocido en el artículo 16° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el artículo 3° de la Convención Americana de Derechos Humanos.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 55° de la Norma Fundamental, los tratados celebrados por el Estado peruano y en vigor forman parte del derecho nacional. En este sentido, los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado, por pertenecer al ordenamiento jurídico interno, son derecho válido, eficaz, y, en consecuencia, de aplicación inmediata. En tal sentido, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, si bien no se encuentra previsto de manera expresa en el texto de nuestra Constitución, encuentra acogida en el artículo 16° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica", así como en el artículo 3° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica".

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2000 (Caso Bámaca vs. Guatemala, fundamento 179), señaló lo siguiente:

> "(...) El citado precepto debe interpretarse a la luz de lo establecido por el artículo XVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que textualmente establece: "Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales". El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad de goce) y de deberes; la violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes (...)."

La expedición del DNI repercute directamente en el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, toda vez que dicho documento, tal como se señaló en los párrafos precedentes, permite el ejercicio de otros derechos fundamentales inherentes al individuo. En ese sentido se ha expresado la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia recaída en el Expediente N° T-1078-01:

> "Por lo anterior, se considera que la conducta omisiva de la demandada constituye una clara amenaza a los derechos fundamentales de los actores, en este caso, respecto del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al demorar en forma injustificada e irrazonable la expedición del documento de identidad, por ser éste el instrumento idóneo para identificarse y acceder al ejercicio de sus derechos civiles, así como para comparecer ante las autoridades en cumplimiento de un deber legal."

De ello se infiere que el derecho en mención importa atribuir jurídicamente a una persona la aptitud suficiente para ser titular de derechos y obligaciones. Este reconocimiento, realizado sobre la base de una concepción ontológica del ser humano, constituye el fundamento para que el individuo pueda desenvolverse plenamente dentro del proceso de interacción social, implicando, a su vez, la obligación —tanto del Estado como de los particulares— de respetar esta subjetividad jurídica.

Aun en el supuesto negado de que el derecho a la personalidad jurídica no tuviera reconocimiento internacional, su existencia bien podría desprenderse de una interpretación del artículo 3° de la Constitución como un derecho fundamental no enumerado o no escrito, por cuanto dimana directamente de la dignidad humana. Al respecto, este Colegiado, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0895-2001-AA/TC ha señalado que:

> "(...) Es bien conocido que, en un sinfín de oportunidades, la realidad supera la imaginación. Por ello, y para que los textos constitucionales y, en particular, aquellos nuevos derechos directamente vinculados con el principio de dignidad no sean desmerecidos en su condición de auténticos derechos fundamentales como consecuencia de la existencia de nuevas necesidades o situaciones, de avances científicos, tecnológicos, culturales o sociales, las constituciones suelen habilitar una cláusula de "desarrollo de los derechos fundamentales", cuyo propósito no solo es prestarle el reconocimiento como derechos de la más alta consideración, sino incluso, dotarlos de las mismas garantías de aquellos que sí lo tienen expresamente. Ese es el propósito que cumple, por cierto, el artículo 3° de nuestra Constitución (...)".

A su vez, este criterio ha sido confirmado por dicho órgano en la sentencia recaída en el Expediente N° T-1050-02, al afirmar que la demora en la expedición de la cédula de ciudadanía del demandante por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, atenta contra el derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica.

Actualmente existe un número significativo de personas indocumentadas, constituidas por quienes carecen de un documento de identidad que las reconozca y, por tanto, no pueden ejercer sus derechos fundamentales.

Esta realidad es consecuencia de la ausencia de una política pública relativa al derecho a la identidad, enmarcada en el contexto del derecho al nombre y a la identificación. Por ello, resulta imprescindible promoverla de manera inclusiva y sostenida mediante acciones concertadas con diversas instituciones públicas y privadas comprometidas en la promoción de los derechos de la población peruana en general, con énfasis en las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad.

En ese escenario, el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas y combatir todo tipo de discriminación de género, etnia, raza, edad, discapacidad, condición social, entre otros, en las poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, a través del pleno ejercicio de la ciudadanía.

Entonces, dada la importancia de este documento para nuestro ordenamiento jurídico, el problema se presenta cuando nos encontramos que a partir de esta decisión del Estado, se dejan de lado justamente a los sectores más desfavorecidos de la población, los sectores más pobres, los marginales, a quienes en virtud de cada vez una mayor y más frondosa legislación y trámites, se les va haciendo más difícil obtener su DNI, ampliándose la brecha entre los ciudadanos y los denominados "indocumentados" que en la práctica devienen en excluidos.

Las personas indocumentadas se presentan en mayor número entre los siguientes grupos poblacionales: las personas en situación de pobreza, las afectadas por el conflicto armado interno, los pueblos indígenas, el pueblo afroperuano, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, quienes presentan una discapacidad y quienes son adultos mayores.

Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Censo Nacional del 2007: XI de Población y VI de Vivienda, se encontró que 277 596 peruanos no tenían partida de nacimiento y 564 487 peruanos mayores de edad no contaban con el Documento Nacional Identidad[22]. Es decir, a ese año más de medio millón de personas mayores a los dieciocho años en la práctica están excluidas, no pueden ejercer sus derechos civiles ni políticos. Son personas a las que no sólo se les niega el derecho de poder hacer alguna gestión ante las Oficinas Públicas sino incluso se les niega la posibilidad de poder ingresar a ellas. Actualmente todas las dependencias estatales han dispuesto la obligatoriedad de solicitar "su documento" a las personas que ingresan a ellas. Lo curioso del hecho es que por lo general muchas veces ni siquiera se toman los datos que aparecen en él, sino únicamente se exige que la persona "tenga un documento", con lo que "el derecho a la identidad" se convierte en lo que podríamos llamar "la tiranía del documento", pues no es suficiente ver a la persona que viene a buscar algún tipo de ayuda sino es necesario que ésta se "identifique" con algún "documento". Tal situación afecta directamente a aquellos que no lo tienen que, como vemos para el caso peruano, no son pocos.

Adicionalmente, a la cifra de personas que no cuentan con DNI, hay que aumentarle la de los niños y niñas menores de 18 años que no cuentan con partida de nacimiento. Según el Censo Nacional del 2007 esta cifra ascendía a 277 596. Esto constituye uno de los principales problemas del Estado peruano, por ello ya el "Plan Nacional de Restitución de la Identidad: documentando a las personas indocumentadas 2005-2009", reconocía esta situación, por lo que señaló:

22 El Programa Juntos, que viene dando importantes resultados para combatir la pobreza en nuestro país, del 2005 a enero del 2010, ha logrado otorgar el DNI a 107 085 mujeres titulares beneficiarias del programa, que antes del mismo eran indocumentadas. Si bien este gran esfuerzo ayuda a reducir la brecha, no la elimina.

> "La indocumentación se constituye en un problema estructural de carácter nacional, que afecta a un considerable número de peruanos y peruanas, generalmente a las poblaciones más pobres, tornándolos vulnerables y ubicándolos en la medida que no pueden acceder a las mismas posibilidades y oportunidades de desarrollo y progreso. Esta situación se agrava cuando concurren además factores de exclusión como el género, la condición económica, la presencia de alguna discapacidad, la edad, o la pertenencia a algún grupo étnico"[23].

Este medio millón de peruanos y peruanas que no tienen su DNI, no cuenta con la herramienta que el Estado nos otorga a los ciudadanos y ciudadanas para "todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser presentado" (cfr. artículo 26° de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil). En este mismo sentido, la Ley N° 27444, que regula el Procedimiento Administrativo General, en su artículo 113° señala que "Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener "Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad (...)". Con lo que más de medio millón de personas adultas en el país no pueden interponer ninguna acción administrativa ante el Estado peruano.

Por lo que viendo al Estado peruano desde la perspectiva de los que nada tienen, de los pobladores analfabetos o semianalfabetos, campesinos (234 532) o migrantes asentados en zonas marginales (329 955) que no cuentan con partida de nacimiento y menos con DNI ven al Estado peruano como "un monstruo grande y pisa fuerte"[24].

La Constitución Política señala en su artículo 7° que las personas con discapacidad tienen derecho a contar con un régimen legal de protección y atención en materia de salud, educación, empleo y rehabilitación, a fin de contribuir a eliminar progresivamente las barreras de carácter físico, cultural y social que diariamente enfrenta este colectivo. Estas acciones apuntan a generar una igualdad de oportunidades.

Cabe destacar que el TC ha reconocido la importancia del modelo social y de la CDPD en la interpretación de los derechos fundamentales de las PCD. En ese sentido, el Tribunal ha señalado que uno de los aspectos más relevantes que se ha plasmado en dicha Convención es el establecimiento del denominado "modelo social", como perspectiva adecuada desde la cual se debe abordar la comprensión de los derechos y las libertades de las PCD (artículo 1°).

Sobre el particular, el denominado modelo social es aquel que comprende a la discapacidad como el resultado de la interacción o concurrencia de una situación particular del sujeto con las condicionantes u obstáculos que la sociedad, con o sin intención, impone a este grupo de personas (cfr. STC N° 00194-2014-PHC/TC, fundamento 11). Por tal motivo, el deber del Estado es promover las condiciones

23 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL – RENIEC. "Plan Nacional de Restitución de la Identidad: Documentando a las Personas Indocumentadas (2005-2009)". Lima: Realiza, 2005, p. 47.

24 Recordemos cómo en el periodo de la lucha contra el terrorismo, las fuerzas del orden asumían que si una persona no tenía su DNI era sospechoso de terrorismo, por lo que inmediatamente era privado de su libertad. Y no era puesto en libertad hasta que uno de los familiares le traía "sus documentos".

necesarias que permitan eliminar las exclusiones de las que históricamente han sido víctimas.

Así las cosas, contrariamente a lo que se percibía desde el anterior modelo médico o rehabilitador —que entendía la discapacidad como un atributo puramente personal—, la vigencia de este nuevo paradigma que trae la aludida Convención traslada la discapacidad, por decirlo de alguna manera, al diseño de las estructuras y comportamientos de la sociedad. De esta manera, por ejemplo, mientras que el hecho de presentar dificultades visuales es una condición de la diversidad humana, el no poder realizar un examen escrito en un centro de estudios porque éste no adopta los necesarios ajustes razonables supone una situación de discapacidad.

Entonces, mientras que el modelo médico o rehabilitador de la discapacidad pretendía que las PCD sean quienes se readapten a la sociedad "curándose" o "rehabilitándose", el modelo social busca más bien que la sociedad se adapte a las necesidades de estas personas.

Ahora bien, en nuestro país el paso del modelo médico o rehabilitador al modelo social ha sido progresivo y, de hecho, sigue estando en proceso en algunos aspectos. Así, uno de los pasos más importantes hacia este nuevo paradigma es la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N.º 29973, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 24 de diciembre de 2012, cuyo artículo 2° conceptualiza a la PCD corno:

> "[A]quella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás".

Como se puede advertir, esta definición inserta la interacción entre la persona y las barreras sociales como el componente determinante para comprender a la discapacidad.

En dicha perspectiva, la jurisprudencia constitucional no ha sido ajena a este cambio de paradigma. Por ejemplo, ya desde el fundamento 4 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 02313-2009-PHC/TC, se puede vislumbrar como el TC, al señalar que no es posible equiparar la situación de discapacidad mental de una persona con la falta o inexistencia de voluntad, ha ido decantándose por impregnar la perspectiva del modelo social en la comprensión de los alcances de los derechos de las PCD.

Luego, el modelo social se ha ido posicionando en la jurisprudencia constitucional a partir de casos como el de la estudiante con discapacidad visual que demandaba la adopción de ajustes razonables para poder rendir un examen [Expediente N° 02362-2012-PA/TC]; aquel otro en el que se solicitaba al Tribunal que ordene a un establecimiento abierto al público que permita el ingreso de perros guía [Expediente N° 02437-2013-PA/TC], o aquel en el que ordenó la creación de una oficina regional de atención a las PCD [Expediente N° 04104- 2013-PC/TC].

Este modelo fue plasmado de manera más evidente en el caso recaído en el Expediente N° 01153-2013-PA/TC, en cuyo fundamento 6 se sostuvo lo siguiente:

> "(...) este Tribunal no puede dejar de hacer notar que la denominada "discapacidad" es en realidad, el no acondicionamiento a un entorno que es hostil para este colectivo. En ese sentido, el nuevo enfoque de la discapacidad lo que resalta es que las alegadas limitaciones o dificultades no emanan de la persona misma, sino de una sociedad que no ha realizado determinados ajustes para garantizar que este colectivo pueda gozar, en condiciones de igualdad, del plexo de derechos y principios que nuestro ordenamiento resguarda".

El aludido modelo social se ha venido desarrollando a través de reformas legales. Así, en el año 2012, se aprobó la Ley N° 29973 —Ley General de la Persona con Discapacidad—, cuyo artículo 2°, tal como lo hace el segundo párrafo del artículo 1° de la CDPD, definió a la PCD como "aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás".

El TC ha dejado establecido, a través de su jurisprudencia (Expediente N° 05048-2016-PA/TC), que el enfoque social de las PCD entiende básicamente que las limitaciones al ejercicio de sus derechos no radican en la persona en sí misma, ni en las deficiencias atribuidas a dichas personas, sino que su origen radica en la interacción de dichas deficiencias con barreras externas existentes en la sociedad y que le impiden su plena y efectiva participación como miembro de aquella en condiciones de igualdad (Exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1384). Ciertamente, el análisis parte desde el ámbito externo, y, en ese sentido, se entiende que una persona tiene discapacidad en tanto la sociedad la discapacita a través de barreras.

En consecuencia, en el estado actual de las cosas, los derechos y las libertades de las PCD deben interpretarse bajo el esquema que propone el modelo social que, como se dejó evidenciado supra, encuentra respaldo constitucional. Solo así, desplazando la "incapacidad" hacia el entorno, podrán combatirse las desigualdades que históricamente han aquejado a este importante sector de la población.

Del mismo modo, corresponde señalar que, al ratificar la CDPD de Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo, el Estado peruano asumió una serie de obligaciones internacionales orientadas a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades de todas las PCD. Parte consustancial a este compromiso es el de generar las condiciones orgánicas o institucionales que permitan alcanzar estos objetivos.

IV. EFECTIVIDAD INTERNACIONAL

Nuevo modelo de Calificación de la discapacidad y registro de datos en la Cédula de Identidad / Vigencia de las actuales especies de "Carné de Discapacidad" (Ecuador)

La calificación de discapacidad se inició en el Ecuador en el año 1996. A partir del año 2001, el país realizó la gestión con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), una de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social de España, para la adopción del Baremo español, como instrumento de calificación de discapacidades en el Ecuador.

Un Baremo es un instrumento que registra normas, datos o características de lo que se quiere medir, asignado un puntaje determinado a cada ítem; lo que permite tener un resultado lo más objetivo posible de la situación; limitando de esta manera el criterio y la opinión que tiene el evaluador. El Baremo español, tiene dos áreas de medición de la discapacidad: la médica y la social.

En efecto, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo tercero, determina como deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Asimismo, el artículo 11°, numeral 2, de la Constitución determina que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad

Ahora bien, el Ecuador suscribió la CDPD en el año 2007 y ratificó el Protocolo Facultativo en el año 2008, con lo cual el país se comprometió a la aplicación de los postulados y recomendaciones de la Convención. La Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador se publicó en el año 2012. El artículo 8° de la Ley crea el Subsistema Nacional de Calificación de la Discapacidad, y determina que la Autoridad Sanitaria Nacional cree los procedimiento e instrumentos técnicos para el efecto.

Existe la recomendación del Comité de la CDPD, para que el modelo de calificación de la discapacidad en el Ecuador reconozca que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con deficiencia y las barreras de la actitud y del entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás; por lo que es mandatorio la generación de un nuevo modelo de calificación de la discapacidad.

Desde el año 2018 se conformó la mesa técnica, con la participación del CONADIS, Ministerio de Salud Pública, la Academia (representada por la Universidad Central del Ecuador) y la Sociedad Civil de personas con discapacidad (representada por las Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad), que elaboró el nuevo modelo de calificación de la discapacidad para el Ecuador; recogido en el "Manual de Calificación

de la Discapacidad", aprobado y autorizado su publicación mediante Resolución de Salud Pública N.° 0305-2018, de fecha 28 de noviembre de 2018.

El Manual evalúa las deficiencias médico-psicológicas de la persona (enfermedades, trastornos o alteraciones de la estructura y función de los órganos); las actividades que la persona puede realizar en su vida diaria y las tareas del hogar (en relación con una vida autónoma e independiente); su participación socio económica; en la vida política, en el ejercicio de su ciudadanía; su comunicación e interacción con los demás; la movilización; el goce de su tiempo libre y de ocio, su ocupación, trabajo o empleo, las facilidades o dificultades de accesos al medio físico, a las tecnologías de la información y comunicación, a los servicios públicos, a la justicia; el disfrute de los derechos reconocidos nacional e internacionalmente; entre otros aspectos que guardan relación con las barreas del entorno.

Por tanto, el porcentaje de discapacidad no se determina únicamente por la condición médica-psicológica (deficiencias), sino que suma las limitaciones (leves, moderadas, graves y muy graves) en las actividades y en la participación social.

El "Manual de Calificación de la Discapacidad" es un BAREMO nacional, que registra las normas, datos y características de la discapacidad, que si viene tienen un contexto internacional (de la Organización Mundial de la Salud – OMS), se encuentra adaptado a la realidad ecuatoriana.

La capacitación y pruebas de aplicación del nuevo modelo de calificación, con los equipos calificadores del Ministerio de Salud Pública, se realizaron en el año 2019, por lo que se encuentra listo para su aplicación.

A lo anterior, se suma que la Ley Orgánica de Discapacidades y la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles disponen que los datos de las personas con discapacidad ingresen a la Cédula de Identidad. Los datos obtenidos ingresarán a un nuevo registro que será enviado al Registro Civil para que consten en la Cédula de Identidad; por lo que a partir de julio del año 2013 ya no habrá carnés de discapacidad.

De esta manera, la Cédula de Identidad se convierte en el documento único que contendrá los datos de la persona con discapacidad para los trámites para los trámites que requiera y la aplicación de las medidas de acción afirmativa, evitando los problemas actuales de la vigencia de dos especies distintas de "carnés de discapacidad" (CONADIS y Ministerio de Salud Pública), fechas de vigencia, recalificaciones, entre otros.

Actualmente, ambas especies de "carné de discapacidad" se encuentra vigentes. Tanto la especie "Carné CONADIS", como la especie "Carné Ministerio de Salud Pública – MSP" son válidos.

En mayo de 2020, el Ministerio de Salud Pública inició la aplicación del nuevo modelo de calificación de discapacidad, para las personas que tienen la especie "Carné

CONADIS", que incluye a personas que podrían tener este documento a partir del año 1996 (hace 25 años).

La Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad determina como finalidad de los mismos "Asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos", además de "Crear e institucionalizar un sistema de gestión de información de igualdad y no discriminación".

De acuerdo a lo resuelto por las consejeras y consejeros del CONADIS, mediante Resolución N° 001-CONADIS-2019, del 26 de diciembre de 2019, las especies "Carné CONADIS" mantendrán su vigencia hasta el mes de junio del presente año, dando la oportunidad hasta esa fecha de realizar la calificación de la discapacidad con el nuevo modelo, en el Ministerio de Salud Pública.

De acuerdo a lo resuelto por las consejeras y consejeros del CONADIS, mediante Resolución N° 001-CONADIS-2019, del 26 de diciembre de 2019, las especies "Carné Ministerio de Salud Pública – MSP" mantendrán su vigencia hasta el mes de junio del año 2023, dando la oportunidad hasta esa fecha de realizar la calificación de la discapacidad con el nuevo modelo, en el Ministerio de Salud Pública.

Durante los tres primeros meses del año 2020, el Ministerio de Salud Pública se encontró ajustando los procedimientos para atender de forma ágil y sin demora a las personas con discapacidad, de acuerdo a los cronogramas antes descritos (números finales de la cédula de identidad y meses programados). Los equipos calificadores se encuentran distribuidos a nivel nacional para realizar la calificación de discapacidad bajo el nuevo modelo.

El registro se efectuará de forma inmediata; de esta manera la persona con discapacidad podrá acercarse luego de 72 horas laborables, al Registro Civil para obtener su nueva Cédula de Identidad. La especie "Carné de discapacidad" será dada de baja de forma inmediata (debido a que ya no será necesaria su utilización).

Por otro lado, el tener una especie de "Carné de discapacidad" no garantiza la obtención o acceso a un "bono". Eso depende del Registro Social, manejado por otra institución del Estado ecuatoriano (no por el CONADIS, ni por el Ministerio de Salud Pública), que determina las personas con discapacidad que se encuentran en situación de extrema pobreza o pobreza, de acuerdo a los parámetros establecidos para esa medición; o dentro de las condiciones establecidas para el Bono Gallegos Lara en la respectiva Norma Técnica del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES.

Las instituciones públicas y privadas, de todos los niveles de gobierno (central, desconcentrado, descentralizado y/o autónomo) deberán dar cumplimiento a la Resolución N.° 001-CONADIS-2019, del 26 de diciembre de 2019.

En consecuencia, con el nuevo modelo de calificación y su registro, ya no será necesaria obtener un "Carné de Discapacidad" porque los datos pasarán directamente a la Cédula de Identidad, como documento único de la identidad de una persona con y sin discapacidad. En el reverso de la cédula podrá leerse: discapacidad, tipo y porcentaje.

Para el caso de personas que tiene la cédula con la palabra "discapacidad", igualmente deben realizar la calificación de discapacidad con el nuevo modelo, ya que como se ha explicado, se conformará un nuevo registro de datos que será traspasado al Registro Civil. En la nueva cédula de identidad constará en el reverso de la especie (plástico) la palabra discapacidad el tipo y el porcentaje.

Este hecho constituye un avance importante para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás.

Credencialización de las personas con discapacidad / Inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad – RND (Chile)

La discapacidad es un procedimiento técnico-administrativo donde se determina si una persona tiene o no discapacidad a partir de la presencia de una condición de salud, previamente determinada por un profesional médico, que limita el desempeño de actividades de la vida diaria y participación social. De este trámite se obtiene una resolución de discapacidad que le permitirá inscribirse en el Registro Nacional de Discapacidad y acreditarse legalmente.

Los resultados del Censo 2012, en materia de discapacidad, revelan que en Chile la población con una o más discapacidad es de 2.119.316 personas, lo que equivale al 12.7% del total de habitantes del país, que asciende a 16.634.603 personas.

Para incorporar la variable discapacidad en el desarrollo del Censo 2012 – Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), aportó con su asesoría técnica al Instituto Nacional de Estadística (INE), realizando un cambio en la pregunta relacionada con la discapacidad, considerando la propuesta de *Washington Group on Disability*, que permitió dar cuenta de esta prevalencia[25].

Las cifras obtenidas son de dos dígitos, tal como lo muestra el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en el año 2004 y la Encuesta de Calidad de Vida del 2000. Asimismo, es coincidente con el Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial quienes estiman en 15% la prevalencia de discapacidad.

La región de Biobío es la que tiene una mayor prevalencia de discapacidad entre sus habitantes, con 16.5%. en tanto las regiones de Los Ríos y Araucanía presentan una

25 Washington Group on Disability Statistics / Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad. National Center for Health Statistics - USA http://www.washingtongroup-disability.com/.

prevalencia de 16.2% y 15.8%, respectivamente. Asimismo, la región de Antofagasta es la que tienen menor prevalencia con 8.3%, seguida de la región de Tarapacá con 10.3% y la región Metropolitana con 10.6%. Por lo tanto, cuando se habla el tema de discapacidad, no es algo de menor envergadura, sino más bien un desafío de lucha por una mayor inclusión.

En el año 2010 Chile promulgó la Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, la que, siguiendo como modelo a la CDPD de la Organización de Naciones Unidad[26], incorpora el enfoque social de derechos y el concepto de persona con discapacidad. La aceptación del modelo social implica que no debe ser la persona en situación de discapacidad, la que se adapte a la sociedad, sino que es ésta la que debe acomodar sus estructuras económicas y políticas, respectando su dignidad.

Con fecha 13 de octubre de 2015, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la resolución 394 que solicitó a la Presidencia de la República modificar las características y fijar menciones en la Cédula de Identidad que emite el Registro Civil e Identificación, para agregar en datos opcionales, la condición de discapacidad regulada en la Ley Nº 20.422[27].

La iniciativa busca favorecer a las personas inscritas en el Registro de Discapacidad a la hora de la realización de todos sus trámites en las distintas instituciones públicas y privadas.

Así, Chile ha avanzado a paso lento en relación a la inclusión de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, pero destacan como un avance la Ley Nº 20.422, la cual funda principios para la igualdad, prevención y rehabilitación; adopta medidas para la igualdad de oportunidades, por ejemplo, fomentando la eliminación de barreras arquitectónicas y promoviendo la accesibilidad universal. Asimismo, esta establece un registro nacional de discapacidad y crea un Comité de Ministros y el Servicio Nacional de la Discapacidad.

Y en lo que respecta al registro de discapacidad, se arguye que las personas que tienen esta condición deben someterse a engorrosos trámites para obtener una credencial que demuestre su real estado, lo que ante una posible pérdida de este documento generaría reales perjuicios.

La inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND) permite la incorporación de antecedentes de personas naturales con discapacidad o instituciones afines a un registro administrado por el Registro Civil, lo que les permite acceder a diversos beneficios.

26 Promulgada en Chile mediante el Decreto Supremo N.° 201, de fecha 25 de agosto de 2008, y publicada en el Diario Oficial de 17 de setiembre de 2008.
27 Ley N.° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

El trámite se puede realizar durante todo el año. En caso de que la condición de discapacidad ya esté calificada y certificada ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), se puede solicitar la inscripción en las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación (sólo sí la COMPIN no realizó el trámite directamente).

La credencial de discapacidad se conoce como un documento totalmente público que tiene como objetivo que los titulares del mismo se pueden amparar a la Ley de Discapacidad. Este documento sirve para acreditar a todas aquellas personas que se inscriban en el Registro Nacional de Discapacidad, mejor conocido como RND.

Al encontrarse inscrito en el RND y con la credencial de discapacidad tienes derecho a acceder a los siguientes beneficios:

- Postular a Ayudas Técnicas del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS);
- Postular a la Beca Discapacidad del Mineduc Postulación a Fondos Concursables del SENADIS;
- Uso de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad;
- Rebajas arancelarias en la importación de vehículos y de ayudas técnicas;
- Postular a subsidios habitacionales u otras prestaciones sociales asociadas a la condición de discapacidad;
- Acceder a todos los beneficios dirigidos a las personas con discapacidad brindados por SENADIS y por otras instituciones públicas que lo exija; y,
- Las instituciones que exigen la credencial de discapacidad también pueden solicitar otra documentación necesaria para acceder o postular a las prestaciones sociales que entregan.

Sobre la calificación de la discapacidad, en esta etapa se evalúa y valora el desempeño funcional de la persona, considerando su condición de salud y la interacción con las barreras del entorno. La calificación es responsabilidad de la COMPIN.

Para realizar esta calificación, se debe presentar en COMPIN un expediente con los antecedentes del solicitante. En ese sentido, las COMPIN realizan la calificación y certificación de discapacidad, para inscripción en el Registro Nacional de las COMPIN.

De este modo, el Informe de desempeño se elabora a través de la respuesta del Instrumento de Valoración de Desempeño en Comunidad (IVADEC), el cual consulta sobre actividades de la vida cotidiana de la persona en situación de discapacidad. Es realizado por parte de un profesional capacitado de COMPIN o del consultorio, correspondiente a su domicilio. Hoy también puede solicitar su evaluación online.

Este documento no se encuentra disponible para descarga online, ya que se debe acudir a COMPIN o el consultorio correspondiente a su domicilio particular para que un profesional de dicha entidad lo realice. Si no está inscrito en el Consultorio, debe inscribirse antes de solicitar la evaluación.

Una vez que COMPIN haya realizado la calificación de discapacidad, esta institución realizará la certificación de discapacidad. Esta certificación corresponde a un dictamen, es decir, una resolución que acredita legalmente la condición de persona con discapacidad. Las COMPIN tienen un plazo legal de 5 días hábiles para realizar la certificación.

La certificación de discapacidad indica:

- Porcentaje de discapacidad global
- Causa principal de discapacidad
- Vigencia de la certificación
- Existencia o no de movilidad reducida

Una vez emitido el Certificado de Discapacidad de la persona evaluada, la COMPIN emite dos copias: una para el solicitante y otra para el Registro Civil e Identificación, entidad que a partir de este antecedente procede a inscribir este caso en el Registro Nacional de la Discapacidad. En ese momento emite la credencial correspondiente, la que será remitida a la dirección de la persona evaluada y que consignó en la solicitud de evaluación presentada en COMPIN.

Una vez certificada la discapacidad, COMPIN remitirá, en un plazo de 20 días hábiles, y por medios informáticos o electrónicos, los antecedentes al Servicio del Registro Civil e Identificación para su inscripción en el "Registro nacional de discapacidad".

El Servicio de Registro Civil e Identificación realiza:

- Inscripción de la persona en el Registro nacional de discapacidad, y
- Emite la credencial de discapacidad. Posteriormente la envía al domicilio del interesado mediante Correos de Chile.

Es muy importante que las personas que viven con discapacidad puedan estar inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, porque así es posible comprender sus necesidades y tomar mejores decisiones, que faciliten su participación en la sociedad, haciendo pleno uso de todos sus derechos. Adicionalmente, a nivel de Estado, quienes estén en el registro podrán acceder a ayudas técnicas de SENADIS, subsidios y becas, entre otros.

De ese modo, se concluye que la posibilidad de entregar la condición de discapacidad en la cédula de identidad en la zona de datos opcionales, favorecería enormemente a las personas discapacitadas inscritas en el Registro de Discapacidad a la hora de la realización de todos sus trámites en las distintas instituciones públicas y privadas.

V. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Mediante el Proyecto de Ley N° 4078/2014-CR, de fecha 11 de diciembre de 2014, se propuso consignar la situación de discapacidad en el DNI, a través de la modificación

del inciso 1 del artículo 32° de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; sin embargo, pese a que fue decretado a la Comisión de Constitución y Reglamento, no obtuvo su dictamen correspondiente.

Asimismo, durante el periodo parlamentario 2016-2021, se presentó el Proyecto de Ley N° 1381/2016-CR, de fecha de 12 de mayo de 2017, que tiene como objeto "modificar los artículos 76° y 78° de la Ley N° 299973, Ley General de la Persona con Discapacidad", el cual fue dictaminado de manera favorable por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, como única comisión dictaminadora, el día 23 de junio de 2021.

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

A pesar del aumento de la visibilidad del tema de las PCD en la agenda pública regional y de los avances en el reconocimiento jurídico de sus derechos, tanto a escala nacional como internacional, su situación en América Latina sigue caracterizándose por una profunda desigualdad, que se materializa en grandes brechas socioeconómicas que colocan a este grupo de la población en una condición de vulnerabilidad social que demanda acciones integrales y sustentadas por una férrea voluntad política. La posibilidad de estas acciones depende de lograr avances reales en materia de igualdad también depende de la posibilidad de realizar diagnósticos certeros, pero el panorama de los datos sobre las PCD en la región no contribuye a ello[28].

En el país, existe un limitado acceso por parte de las PCD a servicios que garanticen el ejercicio de sus derechos y su plena participación en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. En efecto, hasta la fecha, el acceso por parte de esta población a servicios básicos es menor en comparación con el acceso que tienen sus pares sin discapacidad a los mismos, pese a contar con los mismos derechos, lo cual se puede evidenciar en el siguiente diagnóstico:

Tabla Nª 2: Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en el país

MATERIA	PROBLEMÁTICA
Trabajo y Empleo	• El 64,3% del total de la población con discapacidad en edad de trabajar no cuenta con empleo[29] • El 59,2% de la población con discapacidad ocupada precisó que no cuenta con un contrato laboral, manteniendo una relación laboral informal[30] • Solo el 4% de personas con discapacidad que cuenta con un negocio propio es formal (cuenta con número de RUC)[31]

28 Cfr. STANG ALVA, M. "Las Personas con discapacidad en América Latina: del reconocimiento jurídico a la desigualdad real". Santiago de Chile: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL – Serie Población y desarrollo N.° 103, 2011.

29 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. "Informe Especial Nº 06-2020-DP. Alcances sobre la situación de las personas con discapacidad en el contexto de las medidas adoptadas ante la pandemia por el coronavirus (COVID-19)", 2020.

30 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (2014). Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012.

31 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (2019). Encuesta Nacional de Hogares 2019.

MATERIA	PROBLEMÁTICA
Salud	• El 22,7% de las personas con discapacidad no cuentan con seguro de salud[32] • El 48% de la población con discapacidad no buscó atención médica, pese a presentar algún problema de salud[33] • El 88,6% de la población con discapacidad no recibe tratamiento y/o terapia de rehabilitación[34]
Educación	• El 13,9% no cuenta con ningún nivel educativo[35] • Solo el 14,9% ha culminado sus estudios de educación superior[36] • El 65,2% de esta población alcanza como máximo un nivel de educación secundaria[37] • En promedio, la población con discapacidad presenta 2,7 menos de años de estudios logrado, en contraste con sus pares sin discapacidad[38] • El 27,7% del total de la población con discapacidad en el país es analfabeta[39] • El 50% de las instituciones educativas no cuentan con la infraestructura adecuada para brindar un servicio educativo de calidad a las personas con discapacidad[40]
Justicia	• Solo el 9,8% conoce una norma de protección de sus derechos[41] • El 61% de la población en el país considera que las personas con discapacidad son discriminadas[42] • Al menos una vez en su vida, las personas con discapacidad han sido víctimas de violencia económica (29,3%), psicológica (28,9%), física (17,6%) o sexual (11,6%)[43].
Prejuicios y estereotipos	• El 17% de las personas con discapacidad se han sentido discriminadas alguna vez en los últimos cinco años en, al menos, tres lugares diferentes, encontrándose entre los principales: los centros educativos, centros de salud, y en la comisaría o por un policía en la calle. • El 10% de la población considera que es mejor que las personas con discapacidad no salgan de sus casas, en vez de adaptar las calles y construcciones. • El 20% opina que las personas con discapacidad son menos productivas y generan más costos a sus empresas, el 25% no contrataría a una persona que tenga alguna deficiencia física y el 33%, a alguien con una discapacidad intelectual. • El 53% de la población cree que los niños y niñas con discapacidad intelectual no deben estudiar en instituciones regulares, sino en colegios especiales.

En línea con lo antes señalado, le corresponde al Estado adoptar medidas y mecanismos (régimen legal de protección) que faciliten el pleno ejercicio de los

32 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (2018). Perú: Perfil Sociodemográfico. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
33 Ídem.
34 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (2014). Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012.
35 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (2018). Perú: Perfil Sociodemográfico. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
36 Ídem.
37 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (2018). Perfil Sociodemográfico de la Población con Discapacidad, 2017.
38 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (2018). Perú: Caracterización de las Condiciones de Vida de la Población con Discapacidad, 2017.
39 Ídem.
40 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. "Informe Defensorial Nº 183. El derecho a la educación inclusiva. Barreras en la implementación de los servicios educativos públicos y privados para estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas", 2019.
41 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (2014). Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012.
42 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. II Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020.
43 BARDALES, O. "Violencia Familiar y Sexual en las personas con Discapacidad. Prevalencia y Factores Asociados". Lima: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2018.

derechos de las personas que debido a su discapacidad están en desventaja frente a los demás, los mismos que se encuentran reconocidos en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. En ese contexto, como estrategia de inclusión y participación en la sociedad de las PCD, es indispensable que la sociedad tenga pleno conocimiento de su condición, ya que cabe destacar que en muchos casos no es visible o no se puede reconocer a simple vista, esto es necesario para prevenir situaciones de riesgo de estas personas y también para poder brindarles la atención adecuada.

De igual manera, dicho dispositivo legal establece que el Estado asigna progresivamente los recursos presupuestales necesarios para la promoción, protección y realización de los derechos de la PCD, y promueve la cooperación internacional en esta materia. Es decir, existe un consenso en que estas personas merecen una atención especial por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.

Para dicho fin es indispensable que la sociedad tenga pleno conocimiento de la condición de la persona, cabe destacar que hay muchos casos en que esta no es visible a simple vista, existen muchos casos de discapacidad que pasan desapercibidos ante la mirada de las personas y autoridades por lo que se hace necesario establecer un mecanismo de identificación legal de estas personas.

Esto es necesario para prevenir situaciones de riesgo de estas personas y también para poder brindarles la atención y otorgarles sus derechos respectivos, tal como la Constitución y demás normas vinculadas lo establecen. Es necesario e indispensable que dichas personas sean fácilmente identificables ante la sociedad.

Tabla N° 3: Personas con alguna discapacidad (2012)

PERÚ: PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 2012



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012.

La Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, establece que el DNI constituye la única cédula de identidad personal para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y en general. En su artículo 32° establece entre sus características fundamentales: "I) la declaración voluntaria del titular de sufrir discapacidad permanente", a lo que se suma que el artículo 203° de la

Ley Orgánica de Elecciones, modificado por la Ley N° 29478, establece que, entre otros datos, en el Padrón Electoral debe consignarse la declaración voluntaria de alguna discapacidad de los inscritos, sin perjuicio de su posterior verificación y sujeto a las sanciones previstas en la ley en caso de falsedad.

Un total de 3 millones 173 mil 742 personas con discapacidad, que equivalen al 98,9% y el 98,8% de aquellas sin discapacidad, disponen del documento nacional de identidad (DNI); un porcentaje muy pequeño, de 0,5% para personas con discapacidad y 0,6% para aquellas sin esta condición tienen únicamente partida de nacimiento. Hay un pequeño porcentaje que indicó que contaba con carnet de extranjería (0,2% y 0,3% para personas con y sin discapacidad respectivamente) y un 0,5% para el primer grupo y el 0,3% para el segundo, señalaron que no tenían ningún documento de identificación. Como se aprecia en el cuadro, no se encuentra diferencias significativas por sexo, ni tampoco a nivel de área de residencia según se observa en el gráfico, lo que revela la efectividad de los programas de documentación masiva realizados por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Tabla N° 4: Población con y sin discapacidad según tenencia de algún documento de identificación y sexo (2017)

PERÚ: POBLACIÓN CON Y SIN DISCAPACIDAD SEGÚN TENENCIA DE ALGÚN DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y SEXO, 2017
(Absoluto y porcentaje)

Tenencia de documento de identificación / Sexo	Población total	Población con discapacidad		Población sin discapacidad	
		Absoluto	%	Absoluto	%
Total	**31 237 385**	**3 209 261**	**100,0**	**28 028 124**	**100,0**
Tiene DNI 1/	30 855 027	3 173 742	98,9	27 681 285	98,8
Solo tiene partida de nacimiento	182 069	15 265	0,5	166 804	0,6
Solo tiene carnet de extranjería	90 717	5 394	0,2	85 323	0,3
No tiene documeto alguno	109 572	14 860	0,5	94 712	0,3
Hombre	**15 467 946**	**1 388 957**	**100,0**	**14 078 989**	**100,0**
Tiene DNI 1/	15 274 466	1 373 209	98,9	13 901 257	98,7
Solo tiene partida de nacimiento	91 175	6 853	0,5	84 322	0,6
Solo tiene carnet de extranjería	48 791	2 700	0,2	46 092	0,3
No tiene documeto alguno	53 514	6 195	0,4	47 319	0,3
Mujer	**15 769 439**	**1 820 304**	**100,0**	**13 949 135**	**100,0**
Tiene DNI 1/	15 580 561	1 800 533	98,9	13 780 028	98,8
Solo tiene partida de nacimiento	90 894	8 412	0,5	82 482	0,6
Solo tiene carnet de extranjería	41 926	2 694	0,1	39 232	0,3
No tiene documeto alguno	56 058	8 664	0,5	47 393	0,3

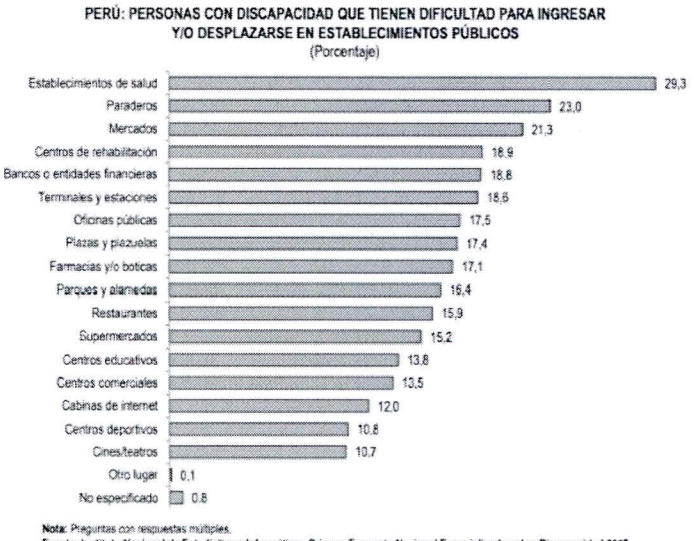
1/ Incluye la población que no recuerda el número de su DNI
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Es efecto, la declaración de la condición de discapacidad solo es "opcional" en el DNI, motivo por el cual mucho la obvia ya que aún tienen el prejuicio de ser discriminados por esta causa. La propuesta que presentamos es eliminar la palabra "voluntaria" de la ley para que así por defecto de entienda la obligatoriedad de dicha declaración.

La no obligatoriedad de declarar dicha situación podría ocasionar muchos problemas al discapacitado ya que en casos en que la discapacidad no es visible, podría sufrir maltratos e incomprensión. Son muchas las veces en que las PCD mental han sido confundidas con delincuentes y han sido maltratados por ese motivo, situaciones que se podrían haber evitado con solo ver su DNI.

Entre los principales problemas que experimentan las PCD, figuran los problemas de accesibilidad, especialmente en lugares públicos. Este segmento de la población presenta dificultades de ingreso y/o desplazamiento, en establecimientos de salud (29,3%), paraderos (23,0%), mercados (21,3%), centros de rehabilitación (18,9%), bancos y entidades financieras (18,8%), entre los principales.

Tabla Nº 5: Personas con alguna discapacidad que tienen dificultad para ingresar y/o desplazarse en establecimientos públicos (2012)



Nota: Preguntas con respuestas múltiples.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012.

Mediante la RENIEC se podrá tener una mejor visión de la forma como está distribuida la población discapacitada en el Perú, por región, provincia, distrito y centro poblado; del mismo se podrá saber su distribución por sexo, salud, edad y grado de discapacidad[44].

Con esta información se podrá dirigir los recursos del Estado con mayor eficiencia, los programas para discapacitados se podrán focalizar de manera adecuada y llegarán a los beneficiarios sabiendo dónde se encuentra la mayor concentración de los mismos.

44 Mediante Resolución Jefatural N.° 000014-2019/JNAC/RENIEC, del 07 de febrero de 2019, se resolvió modificar el artículo primero de la Resolución Jefatural N° 508-2011-JNAC-RENIEC de fecha 10 de octubre de 2011, a fin de adecuar en el Registro único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), la condición de discapacidad de las personas —en atención a las variables de discapacidad mental, discapacidad intelectual, discapacidad física y discapacidad sensorial— a lo dispuesto por el literal l) del artículo 32° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del RENIEC, el mismo que establece que el Documento Nacional de Identidad (DNI) debe contener "La declaración voluntaria del titular de sufrir discapacidad permanente".

En la actualidad es necesario y hasta indispensable conocer la situación de discapacidad de las personas que las padecen, ya que solo así podrán acceder a los beneficios y al trato especial que la ley les confiere. Es necesario corregir esta deficiencia, por tal motivo estamos proponiendo modificar el artículo 76° de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y el inciso l) del artículo 32° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para que dicha declaración sea "obligatoria".

Al respecto, el fundamento 12 de la sentencia del TC recaída en el Expediente N° 00194-2014-PHC/TC (Caso Guillén Domínguez), el máximo intérprete de la Constitución sostiene que, *"(...) contrariamente a lo que se percibía desde el anterior modelo médico o rehabilitador –que entendía la discapacidad como un atributo puramente personal–, la vigencia de este nuevo paradigma [el social] que trae la aludida Convención [sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad] traslada la discapacidad*[45]*, por decirlo de alguna manera, al diseño de las estructuras y comportamientos de la sociedad. De esta manera, por ejemplo, mientras que el hecho de presentar dificultades visuales es una condición de la diversidad humana, el no poder realizar un examen escrito en un centro de estudios porque éste no adopta los necesarios ajustes razonables supone una situación de discapacidad"*.

Seguidamente, en el fundamento 18 de la sentencia, el TC deja sentado de manera explícita que *"los derechos y las libertades de las personas con discapacidad deben interpretarse bajo el esquema que propone el modelo social que encuentra respaldo constitucional"*.

En líneas generales, este cambio de paradigma —denominado "modelo social de la discapacidad"—, propone dejar de ver a la discapacidad como una cuestión que atañe solamente a la situación particular de dichas personas, es decir, como una cuestión que hay que curar, tal y como lo percibía el anterior modelo médico o rehabilitador. En su lugar, dicho modelo propone empezar a entenderla como el resultado de la interacción de las situaciones personales con las barreras existentes en la sociedad que impiden a la PCD gozar de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones[46].

Siendo así, la razón que motiva la presente iniciativa legislativa, de fortalecer el ejercicio de los derechos de las PCD mediante la incorporación de su condición en el DNI y facilitar su inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, complementa las normas nacionales y los compromisos del Estado peruano asumidos en las Convenciones antes referidas.

En efecto, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad que fue promulgada y publicada el 24 de diciembre de 2012, surge como un marco legal para

45 Es decir, a partir de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas vigente desde el 3 de mayo de 2008 y ratificada por el Estado peruano mediante Decreto Supremo N° 073-2007-RE.

46 Cfr. BOLAÑOS SALAZAR, Elard Ricardo. "El sistema de apoyos en la toma de decisiones para las personas con discapacidad". Lima: Gaceta Constitucional. Tomo 132. 2018, p. 169.

la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la PCD y en su Capítulo XII regula la certificación, registro y estadística para las PCD. Al respecto, el artículo 76° de la Ley General de la Persona con Discapacidad ha sido modificado el 10 de noviembre de 2016 por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, ello con el objeto de favorecer a los ciudadanos a la simplificación de los procesos administrativos con celeridad y eficacia.

Complementariamente, el artículo 78° de la Ley General de la Persona con Discapacidad se regula el Registro Nacional de la Personas con Discapacidad y se configura al CONADIS como el ente encargado del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y se establece en el artículo 72°.1 del Reglamento de la Ley N° 29973, aprobado por Decreto Supremo N.° 002-2014-MIMP, los siguientes requisitos para su inscripción: (i) solicitud de la PCD o de su representante legal, padres, curadores o tutores, dirigida al Presidente del CONADIS; (ii) exhibición de DNI del solicitante y del representante legal, padres, curadores o tutores, y presentar un copia simple de los mismos; los menores de edad que no cuenten con DNI deben presentar su partida de nacimiento; (iii) exhibición del Certificado de discapacidad original y presentar copia simple y (iv) una fotografía reciente a color, en fondo blanco.

El CONADIS tiene a su cargo el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, en donde se inscriben los integrantes de este colectivo previa certificación de la discapacidad originada por deficiencias permanentes, la cual es diagnosticada por los centros hospitalarios competentes. Sin embargo, según el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad 2000-2014[47], desde el año 2000 hasta el 2014, se inscribió a 125 379 PCD, lo que representa el 7.96% del total (1 575 402) de la población con discapacidad estimada por la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad al año 2012[48] y el 7.82% del total (1 602 337) estimado por la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO al 2014, lo que demuestra que de la cantidad de PCD solo una mínima cantidad de porcentaje (7.96) se registra ante el CONADIS.

La información ha sido presentada por el INEI según rangos de departamentos, sin embargo, es necesario que, en el caso del departamento de Lima, se separe la provincia de Lima, compuesta por 43 distritos, que por su tamaño poblacional eleva el porcentaje de población con discapacidad, a nivel de todo el departamento. Por lo expuesto, se tiene que la provincia de Lima muestra el porcentaje más elevado de población con alguna discapacidad (31,2%), sobrepasando largamente los porcentajes departamentales.

> El primer grupo está compuesto por cuatro departamentos, con porcentajes entre 5,0% y 5,4% de población que declaró que tenía alguna discapacidad,

47 Anuario Estadístico del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad 2000-2014 (CONADIS).

48 En el año 2012, a solicitud del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), la Comisión de Discapacidad e Inclusión Social del Congreso de la República y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se realizó la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, que constituye el primer esfuerzo nacional cuyo tema único fue la estimación de la prevalencia de la discapacidad y la caracterización de diversos aspectos que afectan el funcionamiento humano tales como: salud, educación, transporte, trabajo, protección de derechos, por mencionar algunos.

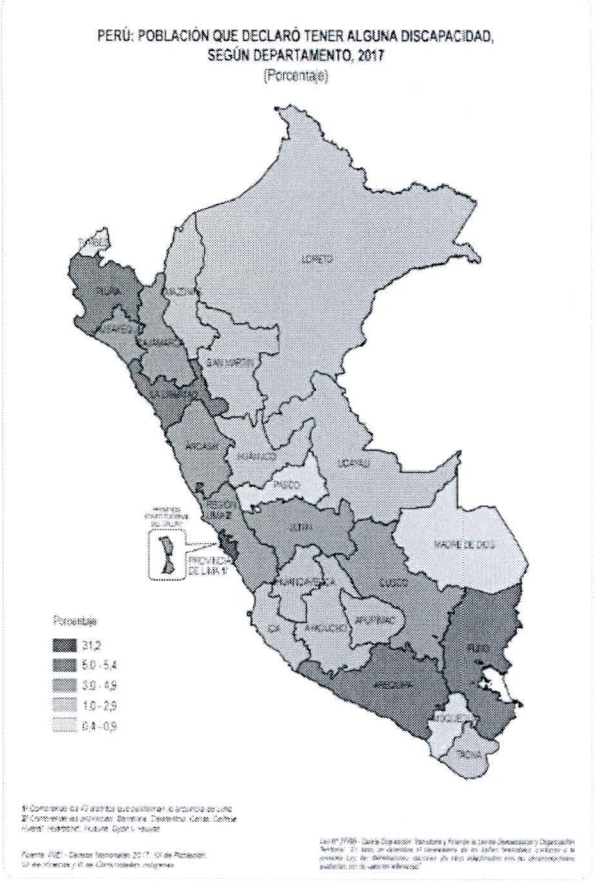
está compuesto por los departamentos de: Piura (5,4%), La Libertad (5,2%), Puno y Arequipa (5,0%) en cada caso.

El segundo grupo consta de seis departamentos más el Resto de Lima (excluyendo la provincia de Lima) con porcentajes entre 3,0% y 4,9%, los cuales son: Cusco (4,5%), Junín (4,2%), Áncash (4,0%), Lambayeque (3,9%), Cajamarca (3,7%), la Provincia Constitucional del Callao (3,6%) y el Resto de Lima (3,4%).

En el tercer grupo con valores entre 1,0% y 2,9% se ubican 10 departamentos: Ica (2,9%), San Martin y Loreto (2,4% cada uno), Huánuco (2,2%), Ayacucho (2,1%), Apurímac y Ucayali (1,4% cada uno), Tacna (1,2%) y Amazonas y Huancavelica (1,1% cada uno).

El cuarto y último grupo se compone de cuatro departamentos con menos del 1% de personas con discapacidad: Pasco (0,8%), Tumbes y Moquegua (0,7% cada uno) y Madre de Dios (0,4%).

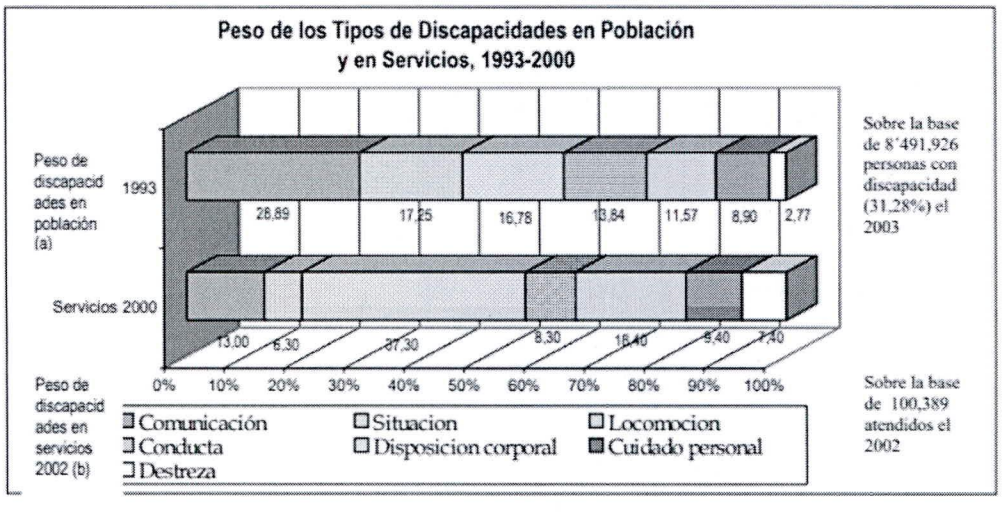
Tabla N° 6: Población que declaró tener alguna discapacidad, según departamento (2017)



De igual forma, se muestra que la mayor parte de la población inscrita en el Registro se encuentra en la región Lima, específicamente en Lima Metropolitana con un 32.23%, seguida de Piura con una 7.29% y Arequipa con un 4.65%; las regiones que tienen menor cantidad de personas registradas son Moquegua con 0.84% seguida de Ucayali con 0.61% y Madre de Dios con 0.4%.

Como se aprecia en las estadísticas del CONADIS, en el Perú existen variadas formas de discapacidad, como se aprecia en el siguiente cuadro:

Tabla N° 7: Tipos de Discapacidades[49]

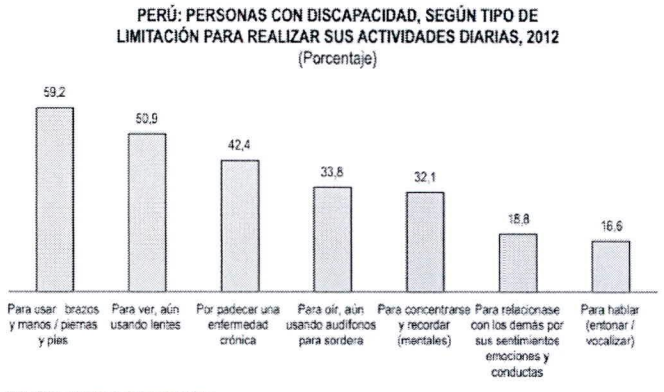


Fuentes: a) MINSA-INEI-OPS, 1993, b) NR. Proyecto: Nuevo local del Instituto Especializado de Rehabilitación, 28/05/2004.

En consecuencia, de todo el repaso anterior se puede decir que las principales discapacidades en el Perú son las referidas a la comunicación, situación, locomoción y de la conducta, que obedecen a diferentes tipos de daños y procesos y que, en general, el perfil de la demanda atendida en cuanto a tipos de discapacidad no coincide con la información sobre lo mismo obtenida de estudios previos en población. No obstante, que los tipos de limitación más frecuentes en la población con discapacidad son las dificultades para moverse o caminar y/o para usar brazos o piernas (59,2%) y las de tipo visual (50,9%).

49 En general estas mismas discapacidades obtuvieron otro tipo de denominación, en otro plano más asequible a la gente, en el censo de 1993 y en las Audiencias Públicas por la inclusión que la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad (CEEDIS) realizó el año 2003 para la inclusión de las personas con discapacidad en 19 ciudades, participando 1,695 personas de este colectivo.

Tabla N° 8: Personas con discapacidad, según tipo de limitación para realizar sus actividades diarias (2012)



Nota: Preguntas con respuestas múltiples.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012

Si bien las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y deberes que la población en general, su situación de vulnerabilidad no les permite ejercerlos en igualdad de condiciones, por ello, se les asigna derechos específicos que faciliten su inclusión social.

Cabe mencionar que esta situación desventajosa se torna más crítica cuando confluyen, entre otros factores, la presencia de la discapacidad en más de un miembro de la familia, motivando que los demás miembros de la misma empleen mayores recursos humanos y económicos en su atención. La condición de pobreza también perjudica en la medida que no les permite acceder a las tecnologías, ayudas compensatorias y asistencia especializada (en materia de salud - rehabilitación - educación), afectando en forma particular a las mujeres quienes deben afrontar una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y presentar una discapacidad.

Entonces, la carencia de documentos de identidad no permite que estas personas ejerzan sus derechos específicos. Aunque el artículo 25° del Reglamento de Inscripciones en el RENIEC señala que es deber y derecho de los padres inscribir el nacimiento de sus hijos e hijas, existe un considerable número de personas con discapacidad que carecen de existencia jurídica por falta de inscripción de su nacimiento y desconocimiento del proceso para regularizar su situación. Las familias, en ocasiones, no consideran importante tramitar los documentos de identidad de sus parientes con discapacidad, ya que estiman que éstos no podrán desarrollar socialmente.

Aunque el RENIEC ha establecido el trámite del DNI en forma gratuita para las personas con discapacidad[50], es necesario identificar a aquellos que se mantienen en sus hogares sin participar en la vida social ni económica. Importante será lograr que

50 Resolución Jefatural N° 599-2004-JEF/RENIEC del 2 de octubre de 2004.

aquellas personas con discapacidad que son mantenidas en casa sin poder salir, también puedan obtener sus documentos de identidad.
Cabe señalar que las personas con discapacidad mental que no han sido declaradas *interdictas* al tramitar su DNI son excluidas del padrón electoral, por lo que se ven afectados sus derechos fundamentales civiles y políticos[51]. Fomentar la reducción de la población con discapacidad indocumentada será un reto.

Siguiendo esa lógica, este Proyecto de Ley busca fortalecer el ejercicio de las PCD mediante la incorporación de su condición en el DNI, con el fin de garantizar los beneficios que la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad les reconoce, tales como:

- Derecho a la consulta, para la adopción de normas legislativas y administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad (artículo 14°);
- Acceso preferente a los programas públicos que contemple viviendas accesibles a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (artículo 18°);
- Estacionamientos accesibles y privados y reserva de espacios para las PCD (artículo 19°);
- Asientos y espacios preferentes de fácil acceso en el transporte público terrestre, debidamente señalizados (artículo 20°);
- Las PCD severa inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad tienen pase libre en el servicio de transporte público terrestre urbano e interurbano (artículo 20°.4);
- Derecho a utilizar la lengua de señas, el sistema braille u otros medios alternativos de comunicación en los procesos judiciales y procedimientos administrativos que se siguen ante la administración pública (artículo 21°.2);
- Acceso a servicios y programas de intervención temprana para niños y niñas con discapacidad (artículo 30°);
- Acceso a servicios de habilitación y rehabilitación en materia de salud, empleo, educación y servicios sociales (artículo 31°);
- Reserva del 5% de vacantes ofrecidas en los procesos de admisión por especialidad profesional de los centros de estudios superiores (artículo 38°.1);
- La persona que interrumpa sus estudios superiores por adquirir una discapacidad mantiene su matrícula vigente por 5 años para su reincorporación (artículo 38°.2);
- Descuento del 50% sobre el valor de la entrada a los espectáculos deportivos culturales y recreativos organizados por entidades estatales, hasta un máximo del 25% del número total de entradas (artículo 44°.1);
- Descuento del 20% sobre el valor de la entrada a los espectáculos deportivos, culturales y recreativos organizados por entidades privadas, hasta un máximo del 10% del número total de entradas (artículo 44°.2);

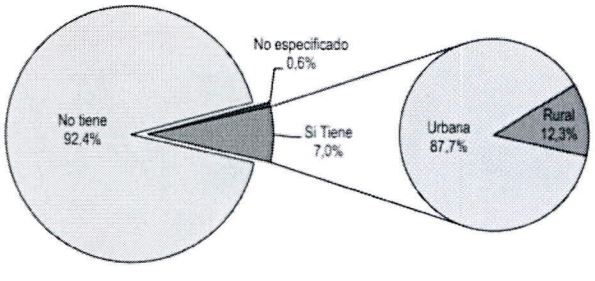
51 Resolución Defensorial Nº 28-2004-DP del 9 de diciembre de 2004, citando el Oficio Nº 339- 2004-GRIAS/RENIEC de fecha 06 de septiembre de 2005.

- Bonificación del 15% sobre el puntaje final obtenido en la etapa de evaluación en los concursos públicos de méritos (artículo 48°);
- Cuota de empleo no inferior al 5% de la totalidad del personal en entidades públicas y no inferior al 3% de entidades privadas (artículo 49°);
- Derecho a ajustes razonables en el lugar de trabajo (artículo 50°);
- Preferencia en la instalación de módulos de venta en los locales de las entidades públicas (artículo 53°.3);
- La PCD mayor de edad, beneficiaria de pensión de orfandad, no es afectada en el cobro de su pensión cuando perciba una remuneración o ingreso asegurable no mayor a dos remuneraciones mínimas vitales (artículo 58°);
- La PCD severa en situación de pobreza y que no perciba ingreso o pensión tiene derecho a una pensión no contributiva (artículo 59°);
- Acceso a una pensión de jubilación adelantada o anticipada, cumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento (artículo 60°);
- Acceso a programas sociales, salud, alimentación, vestido y vivienda adecuados, y acceso a servicios públicos que brinda el Estado (artículo 61°).
- Inafectación al pago de derechos arancelarios en la importación de vehículos especiales y tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda compensatoria (artículo 63°).

De esta manera, con la sola presentación del DNI se acredita la condición de discapacidad ante las entidades públicas y privadas, para lo cual se especificará el tipo de discapacidad que presenta la persona, por lo que la incorporación de la condición de discapacidad en el DNI es indispensable, bastando únicamente la presentación del certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificadores de los distintos establecimiento de salud pública y privada a nivel nacional, toda vez que —según cifras— el 92,4% de las PCD no cuentan con el respectivo certificado de discapacidad. La distribución de aquellos que sí poseen dicha certificación (7,0%) es predominante en el área urbana (87,7%) frente a la rural (12,3%).

Tabla N° 9: Población con discapacidad, según tenencia de certificado de discapacidad (2012)

PERÚ: POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, SEGÚN TENENCIA DE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD, 2012
(Distribución porcentual)

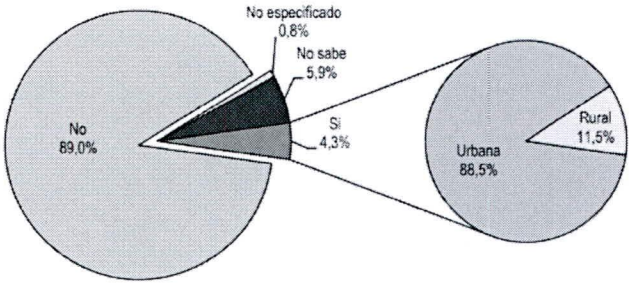


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012.

Asimismo, el 89,0% de personas que padecen algún tipo de discapacidad no se encuentra registrado en el CONADIS. Los que están inscritos (4,3%) residen predominantemente en el área urbana de país (85,5%).

Tabla N° 10: Población con discapacidad, según inscripción en el CONADIS (2012)

PERÚ: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN INSCRIPCIÓN EN EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CONADIS, 2012
(Distribución porcentual)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012

Con ello, se pretende eliminar barreras burocráticas para la acreditación de la condición de discapacidad, así como desaparece la necesidad de utilizar un carnet especial de discapacidad como forma de acreditación, el cual estará reemplazado por el DNI y será válido para todos los efectos legales y administrativos que las PCD requieran, debido a que el trámite de incorporación se simplifica al poder realizarse en las oficinas descentralizadas los diferentes canales de atención de RENIEC, reduciéndose los costos de transporte y tiempo a las PCD.

Sumado a ello, directamente también se favorece a aumentar la visibilidad estadística y a garantizar la plena inclusión de las PCD, toda vez que "la invisibilidad estadística de la población con discapacidad es un reflejo de su marginación y exclusión y constituye una barrera para garantizar su pleno ejercicio de derechos"[52]; por lo que, lograr la plena inclusión de las PCD en todas las esferas de nuestras sociedades es un compromiso impostergable y, por esa razón, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presenta una oportunidad inédita para avanzar en esta senda.

Para dicho propósito, es relevante recordar que el artículo 31° de la CDPD, instrumento ampliamente ratificado por los países de la región, señala que contar con herramientas capaces de recolectar datos estadísticos con fiabilidad, que permitan conocer la situación socioeconómica de las PCD, es una obligación y es indispensable para monitorear su cumplimiento y construir políticas públicas que conduzcan a reducir la discriminación y promover la integración y la igualdad de oportunidades.

[52] Afirmaron expertos reunidos en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile (2020). En la inauguración de la Reunión sobre medición y estadísticas de la discapacidad en apoyo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y al Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda de 2020.

Cabe precisar que, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Jefatural N.° 599-2004-JEF/RENIEC, precisada por la Resolución Jefatural N.° 183-2006-JEF/RENIEC, se ha establecido el beneficio de gratuidad para las PCD que tramitan algunos de los procedimientos orientados a la emisión del DNI contenido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del RENIEC; para lo cual las PCD deben presentar el certificado de discapacidad o una copia certificada de la Resolución de Inscripción en el CONADIS o constancia emitida por un Centro de Educación Especial o Constancia Médica de Discapacidad.

En ese sentido, solicitar la incorporación de la condición discapacidad es una trámite gratuito y voluntario que pretende que las diferentes entidades del Estado se interconectan y permitan el suministro de información actualizada respecto de las PCD y así facilitar el acceso de esta población a los beneficios que la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad les reconoce.

El "Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018", aprobado mediante Decreto Supremo N.° 007-2008-MIMDES del 23 de diciembre del 2008, tiene como objetivo lograr la inclusión y participación plena de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida social. Contiene líneas estratégicas orientadas a ampliar la cobertura del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, mejorando las técnicas de inscripción y coordinando acciones con el RENIEC, como campañas de certificación gratuita de discapacidad, donde se identifican y son atendidos grupos de la población que no cuentan con documentación.

Igualmente, la información recopilada por el RENIEC, respecto a la condición de discapacidad de la persona, goza de interoperabilidad y acceso por las diferentes instancias públicas y de gobierno, lo que servirá para el diseño e implementación de las políticas, programas y servicios para PCD de carácter distrital, provincial, regional y nacional. Por lo que, dotar de DNI al grupo en mención contribuirá a su inclusión social, en la medida en que, con este documento podrán acceder a los derechos y beneficios especiales que les confiere el Estado.

Ahora bien, actualmente el inciso l) del artículo 32° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, permite declarar la condición de discapacidad solo de forma voluntaria en el DNI, motivo por el cual muchos obvian dicha declaración por considerar que serán discriminados o estarán expuestos a prejuicios sociales. No obstante, la no obligatoriedad de la declaración podría incrementar las barreras en la igualdad de condiciones con los demás, en el ámbito social, cultural, económico, entre otros.

Es importante que se entienda que el DNI al tener una vinculación directa con la identificación de las personas, ya que no constituye un fin en sí mismo, sino más bien es un medio para obtener otros, como es el caso de la inclusión y la participación de la persona en la sociedad, también desempeña un rol importante en las políticas del Estado, ya que es el insumo necesario para que el gobierno pueda establecer políticas

de planificación, estrategias y programas de desarrollo, por lo que al contar con la información de PCD en el RENIEC, se podrá tener una visión integral de la forma como está distribuida esta población, permitiendo dirigir los recursos del Estado con mayor eficacia, focalizando los programas de manera adecuada.

VII. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

La aprobación de la iniciativa legislativa propuesta no irroga gastos adicionales al Tesoro Público, por el contrario, la norma tiene un análisis costo beneficio positivo, toda vez que la modificación del artículo 76° de la Ley N.° 29997, Ley General de la Persona con Discapacidad, y del inciso l) del artículo 32° de la Ley N.° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, permite contar con un marco normativo que busca facilitar la identificación de las PCD para asegurar el acceso a los beneficios y garantizar sus derechos establecidos en la legislación nacional.

Por el contrario, el proyecto debe ser considerado viable, debido a que no solo se beneficia a las PCD, sino también al Estado Peruano y sus entidades públicas, a las entidades privadas y a la sociedad, con el fin de garantizar los beneficios que la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad les reconoce, esto último conforme se detalló precedentemente en la descripción del problema público, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla Nº 11: Cuadro de viabilidad y beneficios para la acción gubernamental y los actores sociales

No irroga gastos al Estado, más que la implementación de las normas

PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ESTADO PERUANO Y ENTIDADES PÚBLICAS	ENTIDADES PRIVADAS
• Reconocimiento de la condición de discapacidad. • Descentraliza el trámite de incorporación y registro al poderse realizar en las oficinas regionales y canales de atención de RENIEC. • Garantiza la autonomía y autodeterminación de las personas con discapacidad al establecer el trámite de	• Cumplimiento de las obligaciones adquiridas en Convenidos y tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico peruano. • Permite contar con un registro adecuado para la integración de las personas con discapacidad. • Unifica y actualiza permanentemente los	• Permite el acceso a la base de datos de las personas con discapacidad para la prestación de bienes y servicios dirigidos a esta población. • Facilita la atención de las personas con discapacidad en servicios privados.

incorporación e inscripción de carácter obligatorio. • Simplifica los trámites de incorporación de la condición de discapacidad e inscripción en el Registro. • Reduce el costo de transporte y tiempo. • Mejora la atención en servicios públicos y privados. • Facilita el acceso de los beneficios que la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad reconoce.	datos nacionales de las personas con discapacidad. • Mejora el diseño e implementación de políticas, programas y servicios para personas con discapacidad a nivel distrital, provincial, regional y nacional. • Promueve la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad. • Permite interoperabilidad entre las entidades del Estado para el acceso y suministro de información relativa a las personas con discapacidad. • Evita barreras burocráticas para la acreditación de la condición de discapacidad y acceso a los beneficios que la Ley General de la Persona con Discapacidad reconoce. • Con la eliminación del Carnet de Discapacidad, se disminuirá los gatos.	

El interés que despierta el derecho a la identidad, como hemos visto, es complejo. No es suficiente con decir que una persona tiene derecho al nombre, sino que todas las

personas tienen la obligación de llevarlo a través de su oportuna inscripción en los registros de identificación. Los motivos han sido expuestos en este breve ensayo.

Por lo tanto, creemos que, en el Perú, el derecho de identidad ha evolucionado, por cuanto no se ha quedado sólo en la concesión del derecho de una persona de llevar su propio nombre, sino que el Estado, a través de las normas especiales, ha puesto orden en las obligaciones derivadas de tal derecho, para la inclusión social de todos los individuos, lo que se refleja en sus actos civiles y tráfico patrimonial, que incide de manera directa en la vida social y económica del país.

También, que —como consecuencia de todo ello— el Estado puede planificar adecuada y oportunamente sus grandes políticas sociales, para la protección de los ciudadanos en general. Políticas preventivas y restauradoras, como protección a los discapacitados, seguridad social, cuidado a personas de la tercera edad mediante regímenes adecuados, etc.

A diferencia del siglo XX en que la inscripción en el registro civil de identificación era una mera formalidad para el ejercicio del derecho democrático al voto, en el siglo XXI la finalidad es otra: la integración y participación activa del ciudadano en la vida social como deber, para ejercer su derecho de exteriorizar sus cualidades intrínsecas en sociedad como logro de su proyecto de vida; y, a su vez, lograr indirectamente el impulso conjunto de la sociedad peruana en sí misma[53].

Con ello, estaríamos sentando acciones gubernamentales sin precedentes que se alinean con los objetivos que busca la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la medida en que —conforme lo señaló el Secretario General de las Naciones Unidas en su mensaje por el día internacional de las PCD (2020)— se enfatiza la inclusión de la discapacidad como un derecho humano fundamental y destacando la Estrategia de Inclusión de la Discapacidad de las Naciones Unidas que busca lograr el cambio transformador que necesitamos y transformar las Naciones Unidas para así construir un mundo en el cual todas las personas, incluidas las PCD, tengan las mismas oportunidades, puedan participar en las tomas de decisión y realmente se puedan beneficiar de las dimensiones económica, social, política y cultural.

VIII. ANALISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N.° 08-2006-JUS, el análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional tiene por finalidad analizar si la propuesta normativa trata de innovar supliendo vacíos en el ordenamiento jurídico; o, si modifica o deroga normas vigentes.

53 Cfr. REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL – RENIEC. "Los Registros y las Personas: Dimensiones jurídicas contemporáneas". Lima: Reliza, 2010, pp. 226-227.

En ese sentido, la presente Ley modifica el inciso l) del artículo 32° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el artículo 76° de la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

IX. VINCULACIÓN CON LAS POLITICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL

La presente norma se encuentra dentro del Segundo Objetivo del Acuerdo Nacional, que dice: "**Desarrollo con Equidad y Justicia Social**", específicamente en la Décimo Primera, denominada "**Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación**", que señala:

> *"**11. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación***
> *Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, reconociendo que en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, en particular contra [...] **los discapacitados** y las personas desprovistas de sustento, entre otras. La reducción y posterior erradicación de estas expresiones de desigualdad requieren temporalmente de acciones afirmativas del Estado y de la sociedad, aplicando políticas y estableciendo mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas para toda la población.*
> *Con este objetivo, el Estado: [...] (e) desarrollará sistemas que permitan proteger a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres responsables de hogar, personas desprovistas de sustento, **personas con discapacidad** y otras personas discriminadas o excluidas; [...]".*

En este sentido, en línea con la CDPD, el Acuerdo Nacional, la Visión del Perú al 2050, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fue necesario diseñar y formular una política nacional que permita fortalecer y alinear la intervención del Estado a nivel nacional, para potenciar el desarrollo integral de las PCD, garantizando el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Así, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del CONADIS, presenta la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 (PNMDD), que aborda como problema público la "Discriminación estructural hacia las personas con discapacidad". Este problema público hace referencia a un problema social histórico que afecta a las personas con discapacidad en el país, que trasciende y es independiente de las acciones individuales de discriminación, y que, además, forma parte de un proceso de acumulación de desventajas y tiene implicancias macrosociales en los ámbitos de disfrute de los derechos y reproducción de la desigualdad social.

De este modo, la PNMDD propone la siguiente situación futura deseada: "Al 2030, en el Perú, la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad se habrá reducido, permitiendo, así, que alcancen su desarrollo integral y ejerzan plenamente sus derechos en una sociedad inclusiva". En consecuencia, la PNMDD busca, como fin último, la generación de un impacto positivo en el desarrollo integral de las personas con discapacidad en el país. Compromete a las instituciones gubernamentales, pero

también, involucra y sirve de referencia, a las empresas, la academia, las organizaciones de y para personas con discapacidad, y la sociedad en general, considerando la necesidad de priorizar e impulsar el desarrollo de las personas con discapacidad.

Para alcanzar la situación futura deseada, la PNMDD traza siete objetivos prioritarios y sus respectivos lineamientos, los cuales se vinculan a la participación social y política, la participación en actividades económicas dependientes o independientes, el acceso a servicios integrales de salud, desarrollen sus competencias en igualdad de oportunidades, a través del acceso, participación, aprendizaje y culminación oportuna, a lo largo de su trayectoria educativa, la construcción de actitudes sociales favorables hacia las personas con discapacidad, la existencia de condiciones de accesibilidad en el entorno y al fortalecimiento institucional de la gestión pública para incorporar la perspectiva de discapacidad. Estos objetivos y lineamientos guían y articulan las acciones, procesos, estrategias y, en general, los esfuerzos de todas las instituciones involucradas en la PNMDD.

En ese sentido, en base al desarrollo de la estructuración del problema público que afecta a las PCD, así como la construcción de la situación futura deseada, y el análisis y selección de una alternativa de solución, la presente disposición legal se sustenta en los objetivos prioritarios, sus indicadores y lineamientos que orientan la intervención de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, aprobado por Decreto Supremo N.° 007-2021-MIMP, que señala: "**OP.01. Fortalecer la participación política y social de personas con discapacidad | OP.02. Garantizar la participación de las personas con discapacidad, en edad de trabajar, en actividades económicas dependientes o independientes | OP.03. Asegurar el acceso y cobertura de servicios integrales de salud para las personas con discapacidad | OP.04. Garantizar que las personas con discapacidad desarrollen sus competencias de igualdad de oportunidades, a través de acceso, participación, aprendizaje y culminación oportuna, a lo largo de trayectoria educativa, en los diferentes niveles y modalidades | OP.06. Asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno para las personas con discapacidad | L3.4 Incrementar el acceso a los servicios de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad**".